



UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS FORENSES

No. 12 – Año 8 - Noviembre 2019 - Abril 2020



UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT

CATHEDRA

No. 12 – Año 8
Noviembre 2019 – Abril 2020

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

MISIÓN

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

VISIÓN

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: www.umecit.edu.pa

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: cathedra@umecit.edu.pa

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. José Alberto Nieto Rojas
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa

Dr. Eduardo Atencio Bravo
Vicerrector Académico

Dra. Magdy De las Salas
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Mauricio Sierra
Director Académico

Dra. Merling Flores
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro
Secretaria General

REVISTA CATHEDRA

EQUIPO EDITORIAL

EDITOR:

Mgter. Gino Osellame
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT
ginosellame@yahoo.com

COEDITORES:

Dra. Magdy De las Salas Barroso
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

Dr. Juan David Nieto Rueda
Relaciones Internacionales UMECIT
jdnieto@diazcastillo.com

COMITÉ EDITORIAL:

Dra. Ana Emérita de Villalaz
Profesora emérita de la Universidad de Panamá
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

ÍNDICE

Gino Osellame

Presentación de la edición.....	6
--	----------

José Alberto Nieto Rojas

Editorial.....	9
-----------------------	----------

Artículos de investigación

Amilcar Bonilla, Panamá

Los perjuicios patrimoniales de las fianzas de seguro en la contratación pública panameña.....	11
---	-----------

Ensayos

Javier Alexis Miranda Guerra y Ogami R. Rivera Cano, Panamá

Análisis práctico del “insider trading” en la legislación penal de Panamá.....	30
---	-----------

Migdalia E. Gutiérrez Quintero, Panamá

Breves consideraciones sobre el derecho bancario.....	40
--	-----------

Orlando Gutiérrez Robayo, Colombia

Abordaje criminalístico y penal de los hechos de tránsito.....	51
---	-----------

Leidy Esmeralda Herrera Jara, Colombia

Metodología de la investigación aplicada al derecho penal y las ciencias forenses.....	62
---	-----------

Normas de publicación de la Revista.....	72
---	-----------

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN



Gino Osellame R.

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Panamá
Abogado y docente universitario
Editor de la Revista Cathedra
ginoosellame@yahoo.com

Las leyes como son concebidas hoy día, dentro de los procesos democráticos, representan el mayor apoyo al sistema republicano de gobierno. Son producto por una ficción jurídica, de la voluntad del pueblo.

Bajo esta fórmula, es que resulta en efecto, el principio del gobierno del pueblo, para el pueblo. No obstante, las ciencias políticas, nos dan cuenta, de que las leyes generadas, al calor de los discursos de nuestros representantes, son en efecto, la voz del pueblo.

Nicolás Maquiavelo, para resolver esto, recomendaba al Príncipe el uso de la Ley, pero alternativamente, el uso de la fuerza. Para Maquiavelo, a quien se le acusa en medios liberales y republicanos, de ser un pensador nefasto para la democracia -así lo manifestó Voltaire, y el mismo Maurice Joly-, es para la ciencia política, su progenitor, y para la filosofía fue aquel pensador, que por medio de las letras reveló una verdad. Esa verdad es la política, y el uso de las leyes, como medios de acceder al poder y a su vez, de mantenerlo.

En virtud de lo anterior, se debe claramente deducir, que las leyes, no terminan siendo el reflejo de la voluntad popular, sino un instrumento de poder político del Estado, sobre los gobernados, y el anclaje de un sistema de gobierno, sea despótico o el más representativo de la república.

Muchas Leyes, son aprobadas por nuestro sistema legislativo, sin consulta ciudadana, o en contravención, real a las necesidades del país, en beneficio de sectores ligados al poder, o al ejercicio de una facultad pública, concebida como correcta. Para equilibrar las cargas, es necesario que la sociedad se empodere de sus derechos, y que el derecho sea defendido por juristas habidos de conocimiento, para que triunfe, por encima de las reglas escritas la justicia.

Prueba de esto, es el reconocimiento de Derechos Humanos, cuya génesis, estuvo marcada

por la lucha popular, por el descontento de los desiguales, y por aquellos quienes se enfrentaron al poder, desafiando los sistemas que articulaban la defensa del statu quo.

Con esta breve cavilación, acerca de la verdad la conducta humana y la justicia, presento en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la Edición 12 de la Revista Cathedra, correspondiente a noviembre de 2019 a abril de 2020.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, en donde plantea que el conocimiento se debe actualizar, pues las legislaciones son cambiantes, se renuevan en la medida que las demás disciplinas se van innovando y actualizando a nuevos y mejores paradigmas y es que las diversas facultades se van complementando e impulsando, lo anterior es debido a la investigación que desde nuestras aulas se construyen, se generan y se exteriorizan a través de los semilleros de investigación, cuyos resultados se ven reflejados en revistas como las nuestras

En la sección de artículos iniciamos con el Doctor Amílcar Bonilla, quien nos presenta con una originalidad interesante, el tema **LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DE LAS FIANZAS DE SEGURO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PANAMEÑA**, en el que analiza cómo funcionan realmente las garantías que se aportan para el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren con el Estado. Este artículo, es el resultado de un proceso arduo de investigación, que arrojó como resultado, la evidencia de que estas fianzas son insuficientes, y que la redacción de los contratos públicos, han adolecido históricamente, de complejidades, que obran en contra de los intereses del Estado.

En la sección de ensayos iniciamos con los juristas Javier Alexis Miranda Guerra y Ogami R. Rivera Cano, especialistas en materia de supervisión de actividades financieras, aportan a esta edición el tema **ANÁLISIS PRÁCTICO DEL “INSIDER TRADING” EN LA LEGISLACIÓN PENAL DE PANAMÁ**, en donde se ponen de relieve que el uso de información privilegiada, en contravención de los actores, del sistema financiero, puede devenir en un delito, debidamente tipificado en el Código Penal, donde el bien jurídico tutelado, es la buena fe, necesaria, para la captación y el intercambio de capitales.

La abogada Migdalia E. Gutiérrez Quintero nos presenta su trabajo titulado **BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO BANCARIO** ante la captación de fondos del público y ante la clara importancia que reviste en todo el sistema financiero, el derecho bancario tiende a enmarcar todo este ámbito de estudio y a encontrar las mejores fuentes de regulación del

sector que per se es ampliamente regulado, en el caso panameño, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Contamos en esta edición, con el beneplácito de publicar dos ensayos de interés para la ilustración jurídica y de nuestro foro, cuyos autores, naturales de la hermana República de Colombia, hacen un aporte invalorable y que paso a presentar:

El Dr. Orlando Gutiérrez Robayo, con el tema **ABORDAJE CRIMINALÍSTICO Y PENAL DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO**, nos hace un recorrido de todos los acontecimientos, fáctico jurídicos, de la siniestralidad de hechos de tránsito, en los que se ve involucrada, no solo la relación resultante de un delito, sino la participación de peritos y de miembros de los organismos competentes en materia de tránsito, que darán como resultado, la efectividad o no de determinados enjuiciamientos.

Seguidamente, y para finalizar la presente edición, la Dra. Leidy Esmeralda Herrera Jara, diserta sobre la **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA AL DERECHO PENAL Y LAS CIENCIAS FORENSES**, donde nos deja ver diáfananamente, cómo el conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas de investigación en el campo del derecho y las ciencias forenses radican en la adquisición de las herramientas necesarias para el desempeño eficiente del ejercicio profesional.

El cómo el qué y para qué, de lo que se investiga, son analizados para brindar, luces sobre los resultados que queremos alcanzar, y que realmente, el producto de nuestra investigación, sea la manifestación reconocida científicamente, de lo que se desea probar.

EDITORIAL



José Alberto Nieto

Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia
y Tecnología, Panamá
rectoria@umecit.edu.pa

Hoy tengo el gusto de presentar un nuevo volumen de la Revista CATHEDRA, el número doce, con temas muy importantes y de interés para la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y disciplinas afines a ésta. UMECIT cuenta con un portafolio de programas académicos aprobados por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), entre ellos tenemos la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses con salida intermedia Técnico en Criminalística, Licenciatura en Derecho y Ciencia Políticas, la Maestría en Criminalística con salida intermedia en Especialización en Criminalística y Maestría en Derecho Procesal Civil, con salida intermedia en la Especialización en Derecho Procesal Civil.

Como podemos observar en esta edición, hay un amplio abanico de oportunidades para poder avanzar y seguir investigando, pues nunca debemos detenernos, el conocimiento se debe actualizar, pues las legislaciones son cambiantes, se renuevan en la medida que las demás disciplinas se van innovando y actualizando a nuevos y mejores paradigmas y es que las diversas facultades se van complementando e impulsando, lo anterior es debido a la investigación que desde nuestras aulas se construyen, se generan y se exteriorizan a través de los semilleros de investigación, cuyos resultados se ven reflejados en revistas como las nuestras, diversos son los artículos que los invito a leer con detenimiento, uno de ellos: Los perjuicios patrimoniales de las fianzas de seguro en la contratación pública panameña, escrito por el doctor Amílcar Bonilla, donde se evidencia de que estas fianzas son insuficientes, y que la redacción de los contratos públicos, han adolecido históricamente, de complejidades, que obran en contra de los intereses del Estado.

Otro artículo interesante y que genera controversia es el Análisis Práctico del “Insider Trading” en la Legislación Penal De Panamá, cuyos autores son los abogados Javier Alexis Miranda Guerra Abogado y Ogami R. Rivera Cano, los autores hablan de la información privilegiada del sistema financiero y el presunto delito, tipificado en el Código Penal, donde el bien jurídico tutelado, es la buena fe, necesaria, para la captación y el intercambio de capitales.

Para abordar temas de total actualidad también podemos leer sobre las “Breves Consideraciones sobre el Derecho Bancario” escrito por la abogada Migdalia E. Gutiérrez Quintero, donde menciona la captación de fondos del público y la clara importancia que reviste en todo el sistema financiero.

Y también autores colombianos como el doctor Orlando Gutiérrez Robayo, quien escribió el artículo “Abordaje Criminalístico y Penal de los Hechos de Tránsito”, donde hace un recorrido muy especial para los licenciados en criminalística, y para aquellos abogados que litigan en el derecho penal.

Seguidamente, y para finalizar la presente edición, la Dra. Leidy Esmeralda Herrera Jara, en el artículo, Metodología de la Investigación Aplicada Al Derecho Penal y Las Ciencias Forenses, nos deja ver diáfananamente, como el conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas de investigación en el campo del derecho y las ciencias forenses radican en la adquisición de las herramientas necesarias para el desempeño eficiente del ejercicio profesional.

Para finalizar y no menos importante, nuevamente felicitar a la Dirección de Investigación y Postgrado, puesto que con su proyección y trabajo motiva a todos nuestros docentes y estudiantes que les apasiona la investigación y que se deleitan de una excelente lectura que estará a disposición de toda la comunidad educativa en general.

Igualmente, al Comité Editorial, a quienes hago extensivo está felicitación pues han logrado que nuestra revista se mantenga y continúe enriqueciendo el conocimiento de muchas mas personas que quieren estar actualizadas en diversas ramas del derecho, las ciencias políticas y la criminalística de la mano del cumplimiento y rigurosidad de nuestros artículos que permiten que la revista este indexada.

LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DE LAS FIANZAS DE SEGURO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PANAMEÑA



Amílcar Bonilla

Profesor Titular en Derecho Público y Privado en la Universidad de Panamá

dr_abonilla@yahoo.com

Fecha de recepción: 08/08/2019

Fecha de revisión: 22/08/2019

Fecha de aceptación: 28/09/2019

RESUMEN

El objetivo de la investigación consiste en demostrar que las garantías de contratos expedidas por las compañías de seguro en Panamá, no representan efectividad en caso de incumplimiento del contrato por parte del deudor principal. El estudio aplica la técnica de la entrevista a treinta abogados, de ministerios y de las entidades autónomas que comprenden el noventa y cinco por ciento de todos los contratos públicos que celebra el Estado. En el informe del Contralor del 1º de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, aparecen atendidos en ese período 1,259,728 contratos, convenios y acuerdos por un monto de B/22,182,634,866.00 (pág.48), solo para tener una idea de la cantidad y su monto. Se incluye en el análisis los perjuicios patrimoniales de las fianzas de seguro planteados en el título como variable independiente y la contratación pública panameña como variable dependiente que se complementan en esta investigación. Al aplicar la entrevista se muestran guías por parte del autor y hace un análisis de datos cualitativos al recolectarlos y valorarlos. Como hallazgos de la investigación encontramos que el Estado adelantó 31 millones de dólares a la empresa Hidalgo & Hidalgo, garantizado con una compañía de seguros que no ha honrado su obligación como fiadora. El Artículo 111 de la Ley 61 de 2017 se refiere a la constitución de fianzas: en efectivo, en títulos de créditos del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros o mediante garantías bancarias o en cheques certificados o de gerencia y llegamos a determinar que más del 90% de las garantías se constituyen con aseguradoras, porque la Contraloría le ha autorizado un formato de tres páginas de concesiones que las libera de su responsabilidad.

Doctor en Ciencias Empresariales, con Maestrías en Derecho Público con énfasis en Responsabilidad Patrimonial, Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Desarrollo del Sector Marítimo, especialidades en Derecho Administrativo, Entornos virtuales de aprendizaje y Docencia Superior. Es Profesor Titular en Derecho Público y Privado en la Universidad de Panamá y ha ejercido diversos cargos en el sector Público y en el sector privado tales como Consultor del Banco Mundial

La garantía bancaria cubre media página donde se identifican las partes, montos, garantía y vigencia hasta que se termine el proceso, obra o servicios, sin más condiciones que la de pagar. Concluimos que las fianzas de Compañías de seguro no han representado ningún beneficio para el Estado panameño y le han ocasionado millones de dólares en pérdidas.

Palabras clave: Perjuicios, patrimonio, fianza, contratación, seguro

THE EQUITY DAMAGES OF INSURANCE BONDS IN PANAMANIAN PUBLIC PROCUREMENT

ABSTRACT

The objective of the investigation is to demonstrate that the contract guarantees issued by the insurance companies in Panama are not effective in regards to cases of breach of contract by the main debtor. The study applies the interview technique to thirty lawyers, from ministries and from autonomous entities, that comprise ninety-five percent of all public contracts that the state enters into. In the comptroller's report from November 1, 2018 to October 31, 2019, 1,259,728 contracts, covenants, and agreements in the amount of B/22, 182, 634, 866.00 (page 48) were attended to in that period, just to give you an idea of the sheer number we're dealing with and the total amount. The analysis includes the capital losses of the insurance bonds set forth in the title as an independent variable and in Panamanian public procurement as a dependent variable, which are complemented in this investigation. When applying the interview, guides are shown by the authors and he makes an analysis of qualitative data when collecting and evaluating them. The finding during this investigation show the State gave an advance of 31 million dollars to the Company Hidalgo & Hidalgo, guaranteed with an insurance Company that has not honored its obligation as guarantor. Article III of law 61 of 2017 refers to the Constitution of sureties: in cash, in government credits, in sureties issued by insurance companies, or by bank guarantees or certified or cashier's checks. It is determined that more than 90% of the guarantees are made with insures, because the comptroller's office has authorized a three-page concession format that releases them from their responsibility. The bank guarantee is half a page explaining in detail the parts, amounts, guarantee, and everything that will be covered until the process, work, or services are completed, with no conditions other than payment. The results of the investigation include that the sureties of insurance companies have not represented any benefit for the panamanian state and have caused millions of dollars in losses.

Key words: Damages, assets, bond, hiring, insurance

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la investigación es demostrar que las fianzas de compañías de seguro como garantías de contratos públicos, son las únicas que presentan problemas a la hora de hacerlas efectivas por incumplimiento del deudor principal. A principio de la década de los años 80 solo existían como garantías de contratos con el Estado los títulos de créditos del Estado, dinero en efectivo, garantías bancarias, cheques certificados o de gerencia y garantías hipotecarias. Posteriormente con la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, se le autoriza para regular las fianzas en las contrataciones públicas que se celebren con el Estado y se incluyen a las compañías de seguro, pero con un formato especial elaborado por ellas y aprobados por la Contraloría donde se establecían condiciones para liberarlas de responsabilidad en caso de incumplimiento del deudor principal.

Para oficializar su irresponsabilidad con el Estado, el Contralor General de la República emite el Decreto No. 317 de 12 de diciembre de 2006, por el cual se reglamentan las fianzas que se emiten para garantizar las obligaciones contractuales del estado y se establecen sus modelos. Este Decreto inconstitucional e ilegal que establece privilegios especiales para este grupo financiero, ha traído y sigue ocasionando millones de pérdidas al Estado panameño en fianzas vencidas, porque el contratista se perdió y no le avisaron, porque el contratista no entregó el suministro en la fecha pactada y no le avisaron, porque al contratista lo embargaron y no le avisaron y otras condiciones dentro del formato y fuera del formato. Este problema no se presenta con ninguna fianza emitida por los bancos, títulos de créditos del Estado ni las hipotecarias.

Aclaro que las fianzas emitidas por compañías de seguro son las más usadas, porque resultan más económicas a los contratistas y como las compañías de seguros saben que no van a pagar en caso de reclamos y que la Contraloría obliga a todas las instituciones públicas a aceptar estas fianzas, aunque las instituciones estén convencidas que son un problema y que no garantizan los contratos y obligaciones de los deudores en caso de incumplimiento.

En el informe de gestión del Contralor en el período del 1º de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, página 48, esa institución en un año refrendó contratos, convenios y acuerdos por la cantidad de 1, 259,728 documentos por la suma total de B/ 22, 182, 634,866.00 y el 95% de esos documentos están garantizados por compañías aseguradoras que saben que no van a cumplir.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario celebró contrato con la Empresa Hidalgo & Hidalgo, para construir el sistema de Riegos de Tonosí, adjudicado en enero de 2012 por un monto de ciento cincuenta y cinco (155) millones de balboas, con un adelanto anticipado del 20% del contrato o

sea treinta un (31) millones de balboas de balboas. En este contrato se constituyó la fianza de pago adelantado con compañías aseguradoras cubriendo el 100% del adelanto y ese dinero lo perdió en su totalidad el Estado y la compañía garante no pagó. De acuerdo a nuestra investigación el adelanto se hace obligante porque allí está garantizada la comisión de los funcionarios que contratan las obras o servicios ya que si al empezar el contrato lo despiden o lo cambian el funcionario aseguró su porcentaje, pues este tipo de garantías es un foco de corrupción impresionante. Por eso es normal permitir fianzas que no respondan y el Estado sea la víctima finalmente.

La Contraloría General de la República le ha aprobado ocho modelos de fianzas a las compañías aseguradoras en los actos públicos, para que sustraigan el dinero público y son las siguientes: 1.-Fianza de propuesta 2.-Fianza de cumplimiento 3.-Fianza de pago 4.-Fianza de pago anticipado 5.-Fianzas aduanales 6.-Fianzas de corredor 7.-Fianzas de cumplimiento de inversión 8. Fianzas de Recurso de impugnación 9.-Fianzas judiciales. Esta última fianza hasta donde he investigado los jueces y abogados no han permitido a la Contraloría regular su modelo y por eso estas fianzas judiciales si representa una verdadera garantía al igual que las garantías bancarias, sin condiciones y hasta la terminación del proceso y hay juicios que demoran más de 40 años. (Ver Figura No.1).-

El Contrato de Fianza es aquel en el cual una de las partes se compromete a cumplir una obligación contraída con un tercero, en el caso de que éste no llegue a cumplir en el tiempo y en las condiciones en que se obligó.

El Artículo 1512 del Código Civil panameño define la fianza de la siguiente manera: “Por fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en caso de no hacerlo éste”.

El Código de Comercio de la República de Panamá en el Artículo 809 dice: “Si el fiador fuese ejecutado con preferencia del deudor principal, podrá ofrecer al embargo los bienes de éste si estuvieren libres, pero si no lo estuvieren o fueran insuficientes, correrá la ejecución contra los bienes propios del fiador hasta el efectivo pago del acreedor y ejecutante”.-

En el Código Fiscal de Panamá en el Artículo 1093 dice así: “Todo empleado o agente de manejo está obligado a prestar fianza que garantice las responsabilidades que le incumban, de manera que queden ampliamente protegidos los intereses del Estado”.

La Constitución de la República de Panamá en su Artículo 280 dice lo siguiente: “Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que señale la Ley, las siguientes:

1.....

.....

6.-Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas.

Por eso digo que los formatos de fianzas de compañías de seguros aprobados por la Contraloría General, son inconstitucionales e ilegales, porque infringen la Ley Orgánica de la propia Contraloría, al igual que los códigos Civil, Fiscal y de Comercio de la República de Panamá que son leyes de obligatorio cumplimiento, desviando el concepto de fiador lo que en la doctrina del Derecho Administrativo se llama Desviación de poder, causando perjuicios millonarios al Estado panameño y, en consecuencia, a los ciudadanos que ven mermados los servicios público por la corrupción en sus diversas formas.-

En el gobierno militar de 1968 a 1989 no hubo modificaciones importantes al Código Fiscal y, mucho menos que se causara perjuicios al Estado, el deudor pagaba porque pagaba. Al entrar la nueva era de gobiernos democráticos desde: Guillermo Endara (1989-1994); Ernesto Pérez Balladares (1994-1999); Mireya Moscoso (1999-2004); Martín Torrijos (2004-2009); Ricardo Martinelli (2009-2014); Juan Carlos Varela (2014-2019) y el actual de Laurentino Cortizo (2019-2024), Todos, incluyendo el actual, han modificado la Ley de contrataciones públicas para evitar la corrupción y no quieren escuchar, a pesar que hemos intervenido en las discusiones de esas leyes como ciudadano, nadie le interesa ver este problema de las garantías otorgadas por compañías aseguradoras que tanto daño han causado a los intereses públicos.

No hemos encontrado antecedentes anteriores sobre el estudio de este problema ya que es un grupo institucional que mira hacia otro lado y no quieren resolverlo. No han querido publicar información estadística concreta de los contratos cuyas fianzas no han sido honradas por las compañías aseguradoras, ni la cantidad de dinero que anualmente pierde el Estado por el incumplimiento de estas compañías aseguradoras.

Las preguntas de la investigación son las siguientes:

1. De qué manera se puede eliminar la práctica de adelantos por obras o servicios en los contratos con las entidades públicas, entendiendo que es un foco de corrupción?
2. Qué perfil buscan las entidades públicas para contratar con una empresa que no tiene solvencia económica, personal calificado, equipos o experiencia debidamente comprobada de lo que se va a contratar?
3. Por qué la Contraloría ha permitido que el Estado sea atrapado en un formato hecho por las aseguradoras y no por el Estado con su poder y autoridad?

4. Por qué los políticos no quieren atender este foco de corrupción altamente costoso a los intereses públicos?
5. Por qué la Contraloría General de la República obliga a las entidades públicas a permitir esa fianzas que no representan garantía a pesar que la ley permite otros tipos de fianza que sí son efectivas al momento de ejecutarse?
6. La Contraloría está consciente que el contratista paga el valor de la fianza, pero su valor se lo carga al proyecto para que el estado lo pague?
7. Por qué la Contraloría General no incentiva a utilizar los títulos valores del Estado, garantías bancarias e hipotecarias y dinero en efectivo y en su lugar promueve a las aseguradoras?
8. Por qué la Contraloría General en violación de la Constitución y las leyes, ha desvirtuado la figura de fiador para favorecer que las aseguradoras no paguen?
9. Por qué la Ley de contrataciones públicas no elimina definitivamente el pago adelantado en toda clase de contratos con las entidades públicas y en su lugar se le retiene al contratista un 20%, 30% como fianza que sea devuelta cuando termine el período de garantía del contrato a satisfacción?.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población sometida a estudio estuvo compuesta por un total de 30 jefes de la Dirección de Asesoría Legal, once de ministerios y diecinueve entidades autónomas del Estado, quienes atenderán el 95% de todos los contratos públicos y quienes tendrán a su cargo la ejecución de las fianzas en caso de incumplimiento del deudor principal. Para obtener la información se utilizará la entrevista personal con el propósito de tener una información directa de los abogados e intercambiar y aclarar las interrogantes que se plantearán.

El cuestionario que se utilizó comprendió aspectos relacionados con el método científico para la calidad de los informes. El cuestionario se sometió a una prueba previa con el propósito de conocer la información de la investigación. La sección de métodos describió a los lectores como se conduciría su estudio, incluyendo información sobre la población, muestra, método y equipo. El método escogido para esta investigación es conocido como IMRyD, (Cisneros y Olave,2012).

El enfoque de la investigación fue cualitativo al recolectar datos para descubrir y afinar preguntas de la investigación guiadas por áreas o temas significativos de investigación. Sampieri, H., Fernández C. y Baptista, L.(2014).

Tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo son muy valiosos en las investigaciones

al haber realizado muchas aportaciones al avance del conocimiento, aunque según los autores ninguno es mejor que otro, ya que constituyen diferentes aproximaciones al estudio del fenómeno investigado Bolivia, (2019).

El Artículo 111 de la Ley 61 de 2017, que regula las contrataciones públicas dice así: Las fianzas habrán de constituirse en efectivo, en títulos de créditos del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros o mediante garantías bancarias o en cheque certificado o de gerencia.

En el Artículo 112 de la mencionada Ley se refiere a la competencia de la Contraloría General de la República y dice así: “La Contraloría General de la República absolverá las consultas sobre cualquier aspecto de la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas, conforme a lo establecido en las normas jurídicas vigentes. Las entidades públicas o entes nacionales o extranjeros no podrán limitar, negociar o disminuir la potestad de la Contraloría General de la República en esta materia. Las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones del Estado serán reglamentadas por la Contraloría General de la República, en la que incluirán los modelos de fianzas correspondientes”.

A pesar que todos los abogados de las entidades públicas saben que los modelos de fianzas que ha emitido la Contraloría para las compañías de seguro no sirven sino para hacerle perder al Estado los dineros de los contribuyentes, se ven obligados a no rechazar estas fianzas de las compañías aseguradoras, por la atribución que le confiere la Ley de contrataciones públicas a la Contraloría. En todas las administraciones presidenciales desde 1989 a 2020 se ha modificado la Ley de contrataciones públicas solo para buscar la manera de perjudicar al Estado y no para proteger los recursos públicos.

Los contratos Llave en Mano son la mejor forma de contratar con el Estado por lo siguiente: los proponentes van a una precalificación previa donde se evalúan los siguientes puntos primordialmente: 1.-Solvencia económica 2.-Personal calificado 3.-equipo y maquinaria 4.-experiencia en el área 5.-Oficinas. Aquí esos numerales se les da una ponderación de 20 puntos y los que saquen de 81 puntos en adelante quedan seleccionados. Luego en otra fecha van a la parte financiera y se llamará por orden los que más se acerquen al valor que ha estimado el estudio de factibilidad de la entidad pública. Se le invita al más cerca del precio oficial, si este no acepta se llama al más alto que se baje y así sucesivamente, las reglas están claras y nadie protesta. En este tipo de contrato el Estado paga al final de la obra cuando la recibe a satisfacción y si es por cinco años la Institución en cada presupuesto anual prorratea el valor y lo va depositando en el Banco

Nacional para pagar el recibir el Estado la obra.

La Ley 61 de 2017 en sus artículos 109 y 110 altera totalmente el concepto Llave en Mano para que las entidades tengan la facilidad de negociar con los contratistas a través de adendas y modificaciones al contrato original. En cada período presidencial que se ha modificado la Ley de contrataciones públicas es para acomodar la corrupción y no para acabar con el perjuicio a las entidades públicas que son víctimas de los contratistas corruptos, funcionarios corruptos y de las fianzas de compañías de seguro.

RESULTADOS

De las entrevistas que se realizaron a los treinta funcionarios que atienden personalmente los reclamos de los miles de contratos que se tramitan anualmente en las entidades públicas, se determinó por parte de los abogados entrevistados que las fianzas de compañías aseguradoras causaron muchos problemas al momento de cumplir con su condición de fiadoras en las obligaciones contractuales.

La recolección de datos en la entrevista a los abogados jefes de las instituciones públicas en primera línea son los que deben presentar los reclamos de las fianzas ante un eventual incumplimiento del deudor principal, por lo que su experiencia da la validez y confiabilidad al objetivo de la investigación. Se tomó la información de las entidades públicas porque son las que sufren el día a día el atraso y el abandono permanente de obras y servicios, porque el 95% de las empresas contratistas usan este tipo de fianzas que les libera a ellos de responsabilidad en caso que deba exigirse. Las fianzas bancarias son hasta la terminación de la obra sin condiciones para pagar, es decir, la única condición es que el deudor principal no cumpla para ellos hacerlo. Así ocurre con las fianzas con títulos valores del Estado y las hipotecarias que no agregan ningún tipo de condición para hacerla efectiva ni estar pendiente de su vencimiento. Se tuvo muchas limitaciones para obtener la cantidad de contratos incumplidos porque los archivos de esas instituciones los tienen como documentos confidenciales y el protocolo es tedioso y complicado. Es cierto que esos contratos son publicados en la Gaceta Oficial Digital, pero la información por incumplimiento es casi nula. Se aplicaron las preguntas orales a los entrevistados porque las respuestas podían ser aclaradas o ampliadas inmediatamente por el entrevistado.

En cuanto al análisis de datos las respuestas obtenidas en la población mayoritaria y casi total de los encargados de atender las reclamaciones por incumplimiento fueron los correctos para el nivel de medición de los datos y se analizan con relación a los objetivos del estudio. La hipótesis de trabajo se probó con el análisis de los formatos expedidos y aprobados por la Contraloría

General de la República, exclusivamente para favorecer las compañías aseguradoras y excluir, de esas manera, las otras garantía a que se refiere la Ley.

En la investigación se entrevistó solo a los abogados jefes de las asesorías legales de las entidades públicas que son las que se encargan de los reclamos en caso de incumplimiento del deudor principal.

Los datos fueron analizados por técnicas cualitativas y cuantitativas a través del segmento de la población que le da la validez y confiabilidad al instrumento de medición. El análisis de recolección de datos duró aproximadamente cuatro meses con intervalos de interrupción por limitaciones involuntarias.

La presentación de datos determinó la respuesta al planteamiento del problema y las posibles hipótesis sobre el verdadero problema que presentan éstas garantías de compañías de seguros que lo que han dejado es una pérdida de dinero a las arcas públicas a causa de los formatos aprobados por la Contraloría General de la República.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En esta investigación se pudo determinar que la Contraloría General de la República, ha permitido que las compañías de seguros les hagan un formato de fianza a su medida con requisitos violatorios de las leyes nacionales e internacionales sobre la figura de lo que es un fiador, perjudicando al Estado quien es el que pierde millones de dólares cada año en este tipo de garantías que no representan los intereses del públicos sino de las compañías aseguradoras en perjuicio de los otros tipos de garantías que la Ley permite y que si son efectivas al momento de ejecutarse por incumplimiento del deudor principal. Hemos tenido muchas limitaciones por las reservas de las instituciones como la Contraloría General de la República que no tiene estadísticas de acceso público de los incumplimientos de contratos garantizados por compañías aseguradoras Avello Al (2019). Esta falta de información debe ser atendida para futuras investigaciones, que apoyen nuestra hipótesis de que las fianzas constituidas por compañías aseguradoras son una pérdida de dinero al Estado panameño causada precisamente por la institución que debe velar por la correcta inversión de los fondos públicos y que es responsabilidad constitucional de la Contraloría General de la República.

Presentamos el Modelo de Fianza de compañías aseguradoras que imperaba antes del Decreto del Contralor General No. 317-Leg de 12 de diciembre de 2006, cuando el Contralor General de ese período violó la constitución y las Leyes al aprobar los modelos de Fianzas para Compañías

de seguros, con condiciones para no pagar impuestas por las Compañías de Seguros y aprobadas indebidamente por la Contraloría General de la República, documentos que han perjudicado al Estado panameño y lo siguen perjudicando con la mirada de la Contraloría hacia las compañías de seguros y no cumpliendo con su deber Constitucional y legal de proteger los dineros públicos al establecer privilegios a este grupo de empresas, perjudicando los recursos del Estado.

FIGURA No. 1

En La Garantía de Assa Compañía de Seguros, S.A. número 81802701, expedida el 18 de julio de 1991, solo se identifican las partes y se indica el monto de la fianza por la suma de B/39,617.71 con nota al final que dice así: “La presente caución responderá por los resultados del juicio y transacción y permanecerá en vigencia hasta su terminación, pudiendo hacerse efectiva del modo previsto en la Ley”.-

Esta es una garantía seria y responsable que merece todo nuestro respeto, porque cumple cabalmente con la figura del fiador que en caso de que el deudor principal no cumpla el fiador asume su responsabilidad sin ninguna condición que no sea la de pagar. Otro detalle importante es que esta garantía no tiene término de expiración sino que estará vigente hasta que termine el proceso como debe ser y hay procesos que se extienden hasta por 50 años.



El modelo anterior lo dañó el Contralor General de la República con la emisión del Decreto No.317-Leg de 12 de diciembre de 2006, por la cual reglamenta las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales del Estado y se establecen sus modelos.

En este modelo aprobado por el Contralor aparecen términos como éste:

“INCUMPLIMIENTO: LA ENTIDAD OFICIAL comunicará por escrito a LA FIADORA y a EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolución administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de investigación para el mismo fin, lo que ocurra primero”.

Este modelo obliga al Estado a estar pendiente del movimiento del contratista y a estar pendiente en miles de contratos para avisar en 30 días ya que si no lo hace en éste término el seguro no responde. Por qué la Contraloría General somete a las entidades públicas a semejante predicamento?

El siguiente párrafo del modelo dice lo siguiente:

LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que, producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD OFICIAL no reclamare por dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, en sus oficinas principales, dando una relación escrita de los hechos principales reclamados. La notificación se efectuará por escrito a LA FIADORA.

¿Para qué sirven los modelos de la Contraloría con este tipo de cláusulas?

Como se puede observar en la Figura No.1 no hay condiciones que no sea la de pagar en caso de incumplimiento. Por qué razón la Contraloría General de la República cambió los formatos que eran garantías efectivas hasta la intervención de la Contraloría, para favorecer solo las compañías de seguros en perjuicio de los bancos, títulos valores del Estado, hipotecarios, dinero en efectivo y al Estado panameño que lo ha dejado desprotegido al evadir su responsabilidad Constitucional y legal al no proteger los fondos públicos?

La siguiente cláusula del Modelo dice así:

“El incumplimiento se da con la expedición de la resolución que resuelve administrativamente el contrato. LA FIADORA dispondrá de un término de treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación del incumplimiento para ejercer la opción de pagar el

importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de LA FIADORA y a cuenta y riesgo de ésta, tenga capacidad técnica y financiera, a juicio de la ENTIDAD OFICIAL”

Por qué razón la Contraloría le permite a la fiadora subrogarse en el deudor principal buscando contratar otra persona natural o jurídica que continúe la obra, violando el principio de licitación pública a que se refiere el Artículo 266 de la Constitución de Panamá. La fiadora debe pagar la cuantía de la fianza sin entrar en otras consideraciones.

SUBORDINACIÓN: LA FIADORA estará obligada a cumplir las obligaciones que contrajo conforme a la presente FIANZA, **siempre que el CONTRATISTA haya debido cumplirlas de acuerdo a EL CONTRATO.**

Esta cláusula es otra situación confusa que ha permitido la Contraloría para que las compañías aseguradoras no paguen. Es evidente que si el contratista no cumple, la garante tiene que hacerlo, pero la Contraloría con esto les permiten que eludan su responsabilidad y que el Estado pierda su dinero que la Contraloría debe proteger.

La pregunta es clara. ¿Por qué la Contraloría eliminó el modelo establecido en la figura No.1, para aprobarle otro con tres páginas de condiciones para no pagar? (Ver figura No.1)

FIGURA No. 2

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO DE FIANZA: _____

CONTRATISTA: _____

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD: _____

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE/ CONTRALORÍA GENERAL: _____

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CONTRATISTA: (Se puede identificar el proceso de selección de contratista, la excepción de acto público o el contrato).

VIGENCIA: _____ Días a partir de la fecha indicada en los siguientes casos:

Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato.

Conste por el presente documento (NOMBRE DE LA FIADORA), en adelante denominada LA FIADORA, por este medio le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la obligación de ejecutar fielmente el objeto de EL CONTRATO antes enunciado, y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar.

VIGENCIA: Corresponde al período de ejecución del contrato principal, más un término de un (1) año, si se tratare de bienes muebles, consultorías y servicios para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado, o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyos términos de cobertura serán de seis (6) meses, y por el término de tres (3) años, para responder por defectos de reconstrucción o construcción de la obra o bien inmueble. Vencidos estos términos y no habiendo responsabilidad, se cancelará la fianza. En caso de una OBRA entregada sustancialmente ejecutada, la fianza de cumplimiento para responder por vicios redhibitorios y defectos de construcción o de reconstrucción, comenzará a regir a partir del recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir del acta de aceptación final.

OBJETO: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u obligación de ejecutar fielmente su objeto y, una vez cumplido éste, corregir los defectos a que hubiere lugar.

INCUMPLIMIENTO: LA ENTIDAD OFICIAL comunicará por escrito a LA FIADORA y a EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolución administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de investigación para el mismo fin, lo que ocurra primero.

LA FIADORA quedará exonerada de responsabilidad conforme a esta fianza en caso de que, producido cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD OFICIAL no reclamare por dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de dicho incumplimiento, en sus oficinas principales, dando una relación escrita de los hechos principales reclamados. La notificación se efectuará por escrito a LA FIADORA.

El incumplimiento se da con la expedición de la resolución que resuelve administrativamente el contrato. LA FIADORA dispondrá de un término de treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación del incumplimiento para ejercer la opción de pagar el importe de la fianza, o de sustituir

al contratista en todos sus derechos y obligaciones, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de LA FIADORA y a cuenta y riesgo de ésta, tenga capacidad técnica y financiera, a juicio de la ENTIDAD OFICIAL.

Acciones Legales: Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por la ENTIDAD OFICIAL, a LA FIADORA. Para efectos de reclamación, también se entiende a LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como ENTIDAD OFICIAL.

Cualquier acción legal, ya sea judicial o extrajudicial que inicie LA ENTIDAD OFICIAL deberá entablarse contra EL CONTRATISTA conjuntamente con LA FIADORA y la petición deberá solicitar en todo caso la condena de EL CONTRATISTA y LA FIADORA.

SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA: LA FIADORA tiene derecho dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación de incumplimiento contenida en la Resolución Administrativa del Contrato u Orden de Compra, a pagar el importe de la fianza, o a sustituir al contratista en todos los derechos y obligaciones del contrato, siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta y riesgo de la fiadora, tenga capacidad técnica y financiera, a juicio de la entidad pública contratante.

SUBROGACIÓN: En caso de que LA FIADORA le diere cumplimiento a las obligaciones asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago de los perjuicios pecuniarios o mediante la ejecución de las obligaciones garantizadas, subrogará a EL CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de dicho CONTRATO, incluyendo todos los valores e indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y créditos que LA ENTIDAD OFICIAL le debiere a EL CONTRATISTA al tiempo en que tuvo lugar la falta o que debieran pagársele después, según las estipulaciones de EL CONTRATO. En consecuencia, a partir del momento en que la ENTIDAD OFICIAL presente una reclamación a LA FIADORA, quedarán sin efecto cualesquiera cesiones de pago de dinero derivadas de EL CONTRATO y LA ENTIDAD OFICIAL cesará todo pago a EL CONTRATISTA, acreedores o cesionarios, los cuales a partir de ese momento aprovecharán exclusivamente a LA FIADORA. De igual manera, LA FIADORA se subrogará en cualesquiera otros derechos y acciones que LA ENTIDAD OFICIAL tuviere en contra de EL CONTRATISTA.

SUBORDINACIÓN: LA FIADORA estará obligada a cumplir las obligaciones que contrajo conforme a la presente FIANZA, **siempre que el CONTRATISTA haya debido cumplirlas de acuerdo a EL CONTRATO.**

PRÓRROGA O MODIFICACIÓN: LA ENTIDAD OFICIAL notificará a LA FIADORA las prórrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u Órdenes de Compra. LA FIADORA manifestará su consentimiento

mediante la emisión del endoso respectivo. En caso contrario, EL CONTRATISTA deberá presentar una FIANZA que garantice la Prórroga o modificación del contrato.

PRÓRROGA POR SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA: Cuando LA FIADORA asuma por intermedio de una persona idónea al efecto la ejecución de la obra, tendrá derecho a convenir prórrogas del término pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior, demoras motivadas por fuerza mayor o casos fortuitos. Para este fin, se tomará en cuenta la demora normal por razón de la sustitución de EL CONTRATISTA.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de _____,
República de Panamá, a los _____ días del mes de _____ de
_____.

POR LA FIADORA

POR EL CONTRATISTA

(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto Núm.317-Leg de 12 de diciembre de 2006).

CONCLUSIONES

La Contraloría General de la Republica es la responsable de la emisión del Decreto No. 317 de 12 de diciembre de 2006, por la cual se reglamentan las fianzas que se emiten para garantizar las obligaciones contractuales del Estado y se establecen los modelos, modelos éstos que violan la Constitución y las leyes vigentes de la República de Panamá y constituyen una carga muy pesada a los intereses públicos al tener las instituciones del Estado que aceptar, a sabiendas que no facilitan su cobro al momento de hacerlas efectivas, porque han sido autorizadas por la Contraloría General y quienes la presentan exigen que tienen que aceptarse.

Las compañías de seguros cambiaron el formato en la Figura No. 1, haciendo el formato que aparece en la Figura No. 2 y entregándoselo a la Contraloría General de la República para que le diera su aprobación, situación que nos es normal que el Estado por su poder y autoridad se adhiera a un contrato de Fianza hecho por un particular y dejando desprotegido los intereses públicos. Esto debe corregirse cuanto antes ya que se ha convertido en un foco de corrupción muy elevado en perjuicio de los intereses públicos. (Recodar Riegos de Tonosí donde el Estado recibió una Fianza de compañía aseguradora por adelanto del 20% en un contrato de 155,000,000.00 garantizando

31,000,000.00 y el Estado perdió ese dinero y el seguro basado en las tres páginas para no pagar aprobadas por la Contraloría no pagó y el Estado perdió ese dinero).

La facultad concedida a las compañías aseguradoras en los formatos aprobados por la Contraloría General de la República, desvirtúa el principio de competencia establecido en la Constitución y desarrollado en la Ley de Contratación pública, al permitir que las aseguradoras en vez de pagar el monto de la fianza en caso de incumplimiento del deudor principal, pueda ella misma contratar a un tercero, sin ningún tipo de evaluación técnica ni financiera por parte de la entidad pública dueña de la obra o del servicio, consideraciones que se tomaron en cuenta cuando se hizo el acto público que fue el paso previo para la elaboración del contrato original. Al incumplir el contratista con el Estado, el seguro debe pagar el monto pactado en la fianza total, como ocurre con los bancos, sin tener facultades de subrogarse en la obra sino en pagar el monto acordado.

Todas las definiciones que hemos expuesto en este trabajo tanto de la doctrina así como de los diferentes códigos panameños, se deja claramente establecida la obligación del fiador de pagar en caso de incumplimiento del deudor y no entrar en ninguna consideración diferente a la de pagar. No es correcto que se le dé la oportunidad al fiador de buscar cualquier persona natural o jurídica que no tenga la solvencia económica, la experiencia, el personal calificado, el equipo, maquinaria y oficinas debidamente establecidas dentro del país, para permitirle a las compañías de seguro evadir su responsabilidad respaldada por la Contraloría General.

RECOMENDACIÓN

Como se expresó antes, después del gobierno militar que fue derrocado por los Estados Unidos de América en diciembre de 1989, los siete presidentes incluyendo el actual que ha tenido la nueva democracia, han reformado la Ley de contrataciones públicas para acabar con la corrupción y ninguno hace lo que hay que hacer y son cosas muy elementales y sencillas a saber: Todos los actos públicos deben ir a una precalificación previa y en otro momento el precio solamente de los precalificados (en esa precalificación se evalúa solvencia económica de la empresa, personal calificado, experiencia, equipos y maquinarias y oficinas). Recomendando eliminar totalmente los adelantos por obras y servicios y en su lugar tomar el 20%, 30% de los pagos que se hagan por tramos terminados o servicios parciales recibidos y eliminar todo tipo de fianza en los contratos públicos si total el Estado no puede hacer efectivas esas fianzas al momento de su ejecución. Esta propuesta no es invento mío lo aplican en el Canal de Panamá y en los contratos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Reconstrucción y Fomento, entre otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avello, R.(2019). El escabroso tema de las auto-citas, blog: Escuela de autores de la Revista Comunicar.-

Avello, R. (2017). ¿Qué es un artículo original de investigación? Blog de Red, Revista de Educación a distancia.

Barnes, J. (2018). Estudios sobre el Procedimiento Administrativo, Editorial Tirant Lo Blanch, España.

Barreiro, R. (2015). Diccionario de la Energía Eléctrica, Editorial Abaco de Rodolfo de Palma, Argentina.

Cassage, J. (2016). El Principio de Legalidad y la Discrecionalidad Administrativa, Julio César Faira Editor, Montevideo, Buenos Aires.

Cuadra, T. (2015). Derecho de las Telecomunicaciones, Editorial Civitas, España.

De Canales, F., De Alvarado E., Pineda E. (2019). Metodología de la Investigación, Cochabamba, Bolivia.

De Roda, I. (2015). Revista Perspectiva Empresarial, Scholar.google.com.pa, 2(2), 35-55.-

Estevez, R. (2016). Manual de Derecho Urbanístico, Editorial El Consultor, Madrid.

Fernández, A., José, M. (2015). Contratación Pública, Editorial Bosch, España.

García, F. (2016). El Derecho Administrativo Internacional, Editorial Instituto Internacional de Administración Pública, Madrid.

Gordillo, A. (2017). Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires.

Lariguet, G. (2016). Metodología de Investigación Jurídica, Editorial Brujas, Universidad de Córdoba España.

López, R., Muñoz, G. (2018). Experiencia de Maestros para la formación de Lectores, Universidad de Yucatán, México.

Marato, M., González, M. (2015). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.-

Marcelo, R. (2016). Manual de Redacción Científica, Caerán Poma, Lima, Perú.-

Martínez, J. (2016). Contratación y Transparencia, Editorial El Consultor, España.

Matas, A. (2018). Diseño del Formato Escolar, Tipo Likert, Revista Electrónica de investigación Educativa.-

Mitre, E. (2017). La Potestad Sancionadora del Estado y la Convencionalidad en sede administrativa, Congreso de Derecho Administrativo, Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Nettel, A. (2018). El Discurso de los Procedimientos Administrativos, Editorial Fontamara, México.-

Rendón, T. (2016). Solución Justa en el Derecho Administrativo, Universidad de Guanajuato, México.-

Rodríguez, J. (2016). Derecho Internacional de Contrataciones Administrativas, Editorial Konrad Adenauer Stiftung, Argentina.

Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación, McGraw Hill Editorial, México.

Santiago, D. (2018). Libre Prestación de Servicios y Administración Local, Editorial Aranzadi, España.

Sarmiento, J. (2015). Estudios de Derecho Administrativo, Ediciones Depalma, Argentina.

Trayter, J. (2015). Desarrollo Administrativo, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona.

Zapata, R. (2015). La Investigación y la Edición Científica en la Web Social, la Ciencia Compartida, Revista de Educación a Distancia.

CÓDIGOS Y LEYES

Código Civil de la República de Panamá (2017), Editorial Nomos, S.A., Colombia.

Código de Comercio de la República de Panamá, Gaceta Oficial Digital No. 2418 de 4 de septiembre de (2016).-

Código Fiscal de la República de Panamá, actualizado por la Ley 76 de 13 de febrero de (2019), publicado en la Gaceta Oficial Digital 28714-B de 1 de febrero de 2018.-

Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría General de la República.

Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que modifica la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que regulan las Contrataciones Públicas en la República de Panamá.

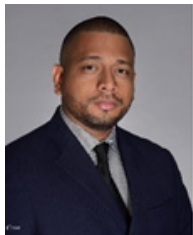
Decreto del Contralor General de la República No. 317-Leg de 12 de diciembre de 2006, por el cual se reglamentan las fianzas que emitan para garantizar las obligaciones contractuales del Estado y establece los modelos.

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL “*INSIDER TRADING*” EN LA LEGISLACIÓN PENAL DE PANAMÁ



Javier Alexis Miranda Guerra

Abogado y Director de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá



Ogami R. Rivera Cano

Abogado y Coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología,
UMECIT, Panamá
coord.derecho@umecit.edu.pa

Fecha de recepción: 11/07/2019

Fecha de revisión: 12/09/2019

Fecha de aceptación: 01/10/2019

RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito, introducir una figura penal sobre la cual la doctrina es escasa respecto de las experiencias nacionales e inclusive en otras latitudes de nuestra área continental, siendo probablemente, la experiencia en Estados Unidos una de las más enriquecedoras, desde un enfoque académico, sin embargo, es una figura existente en nuestro Código Penal, técnica e interesante, donde para su configuración y prueba, se conjugan perfectamente lo jurídico con las ciencias forenses. No obstante, es necesario con antelación adentrarse en el sistema en el cual ocurre, siendo este el sistema financiero, y además, el mercado específico, es decir, el mercado de valores, el cual cada vez tiene un impacto positivo mayor en la economía del país y que representa un medio alternativo para el desarrollo financiero de los inversionistas, quienes deben ser tutelados, sumado al mercado en el cual se desarrollan.

Palabras clave: Sanción, sistema financiero, delito, servidor público, entidades financieras

PRACTICAL ANALYSIS OF THE “*INSIDER TRADING*” IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF PANAMA

ABSTRACT

The purpose of this article is to introduce a criminal figure on which the doctrine is scarce with respect to national experiences and even in other latitudes of our continental area, the

experience in the United States being probably one of the most enriching, from a perspective Academic, however, is an existing figure in our Penal Code, technical and interesting, where for its configuration and proof, the legal is perfectly combined with the forensic sciences. However, it is necessary in advance to enter the system in which it occurs, this being the financial system, and also the specific market, that is, the stock market, which has a greater positive impact on the economy of the country. country and that represents an alternative means for the financial development of investors, who must be protected, added to the market in which they develop.

Key Words: Sanction, financial system, crime, public servant, financial entities, economy, law

PREFACIO

Este artículo tiene como propósito un tema que, aunque no tan novedoso, en cuanto a su nueva institucionalización como tipo penal, en nuestro país es poco conocido dentro de la legislación penal, precisamente, ante su poca ocurrencia, no obstante, supone una protección especial, pues su comisión puede afectar un mercado basado en la confianza, como lo es el mercado de valores.

Es preciso tener presente que el mercado de valores es un mercado organizado de intermediarios que representan los intereses particulares, de sociedades mercantiles y del mismo Estado en el libre intercambio de valores, dentro de las reglas establecidas, tanto como por este último a través de diversas dependencias, como por los intermediarios que participen en el propio mercado de valores¹.

Por ende, como en todo ámbito social, este mercado no se escapa al perjuicio de quienes, a través de sus acciones típicas, antijurídicas y culpables, podrían realizar una conducta en su detrimento, por tanto, ante lo sensitivo y las repercusiones sociales y económicas que ello pueda conllevar, el legislador se ve en la necesidad de establecer el *ius puniendi* más allá de la mera esfera administrativa, a través de su derecho de ultima ratio, el derecho penal.

INTRODUCCIÓN AL TEMA – SISTEMA FINANCIERO

Regularmente y en un concepto lo más sucinto posible, se define el sistema financiero de un país como el conjunto de instituciones, medios y mercados que permiten canalizar el ahorro de aquellas unidades de gasto con superávit hacia aquellas unidades de gasto que precisamente necesitan de esos fondos para cubrir su déficit². A propósito de ello, se entiende en este sentido que

1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo3.pdf Visto el 19 de nov. de 19.

2 Castillo, Montero y Montilla (2019). Introducción a los sistemas financieros. Córdoba, España. Escuela Francisco Largo Caballero.

las unidades excedentarias pueden optar por gastar o consumir esa liquidez, o pueden sacrificar la satisfacción de dicha necesidad mediante el ahorro o rentabilizar dicho ahorro hacia la inversión en el sistema financiero³.

Sobre lo expuesto, la República de Panamá es reconocida como un centro financiero pujante, y que no se escapa de contar con un sistema debidamente estructurado, en sus tres y más conocidas ramas a saber:

- Actividad bancaria.
- Actividad de seguros
- Actividad del mercado de capitales.

Quizá, el más conocido, en especial en nuestro sistema financiero, vendría a ser la actividad bancaria, sin embargo, no se puede soslayar la importancia que los otros sujetos del sistema financiero pueden tener en la economía nacional.

Al respecto del tema en desarrollo, el interés nuestro radicará sobre el mercado de valores, el cual es preciso añadir, está compuesto por una cantidad amplia de intervinientes quienes realizan transacciones o intercambios de activos financieros o dinero, según sea el caso, y que se encuentra a su vez ampliamente regulado, llevando esta batuta la Superintendencia del Mercado de Valores. En este mercado, la colocación, en términos generales, puede estar referida a deuda o capital. En otras palabras, se trata de ofrecer obligaciones (bonos) o títulos representativos de capital (acciones)⁴, entre otra variedad de instrumentos financieros que permite el mercado.

El eje regulatorio de esta actividad desde la perspectiva de la administración pública lo vemos establecido en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, donde, haciéndonos eco del Dr. Carlos Barsallo, se cimienta en principios positivos, propios del mercado y extraños a otros regímenes financieros como el principio de igualdad y trato justo, de transparencia, de rendición de cuentas, de protección al inversionista, de correcta formación de los precios, de reducción del riesgo sistémico y de innovación⁵.

3 López y González (2008). Gestión Bancaria, factores claves en un entorno competitivo. España. McGraw Hill 3ª edición.

4 Roselló, R. (2011). Introducción al mercado de capitales. Compendio de Mercado de Valores. Lima, Perú. Ediciones Legales.

5 Barsallo, C. (2006). Aportes del Mercado de Valores. Panamá. Superintendencia del Mercado de Valores.

En este sentido, hacemos especial connotación respecto al principio de igualdad y trato justo, el cual no es más que la oportunidad en semejanza a la cual deberían tener acceso todos los inversionistas, ya sea pequeño o grande, de información y transparencia, de manera tal que todos se encuentren en igualdad de condiciones al momento de tomar sus decisiones de inversiones.

Sin embargo, dicho supuesto puede ser corrompido, justamente, a través del manejo de información que no es de acceso público, que fue obtenida a través de una posición de privilegio ya sea fortuita o dolosa, y que coloca a dicho inversionista en ventaja respecto al resto, lo cual nos permite introducirnos a la figura que el derecho anglosajón ha titulado como “insider trading”, que, traído al idioma español, la doctrina lo ha denominado como uso de información privilegiada en el mercado de valores.

TIPOLOGÍA SEGÚN EL CÓDIGO PENAL DE PANAMÁ

El delito in comento lo vamos a ver establecido en el Título VII del Código Penal de la República de Panamá, es decir, dentro de aquel catálogo de Delitos Contra el Orden Económico, con mayor precisión, en los delitos de carácter financiero. Como hemos anotado en líneas anteriores, el sistema financiero panameño, está compuesto por varios miembros que en su conjunto dentro de sus actividades captan fondos del público y coadyuvan en la generación y mejora de la economía del país. En consecuencia, es lógico colegir que su afectación conllevaría un impacto en el desarrollo de la sociedad que el Estado, ante hechos que lo vulneran, debe aplicar medidas preventivas y represivas, siendo una de ellas, el derecho penal.

En vista que el presente artículo tiene un propósito eminentemente académico, no podemos pasar por alto las conceptualizaciones, así tenemos respecto a los delitos financieros, que Rafael Miranda Gallino ha expuesto que *“El delito financiero, en especial, implica desde luego una estafa en el orden de la buena fe de los negocios y la confianza pública; pero sus consecuencias indirectas son igualmente dañosas, pues retrae capitales que de otro modo se invertirían en actividades honestas, los desvía hacia otros fines...”*⁶, y podría afectar directamente, reiterando lo antes expresado, la confianza del público que deposita sus fondos en un tercero, bajo la premisa de que estos serán debidamente administrados y que no se harán gestiones en su detrimento.

Sobre esta base, se debe tener presente que aunque estos delitos no son violentos, revisten de una gravedad social, por tanto, puede entenderse como aquellos delitos de “cuello blanco”, donde

6 CASTRO, A. (2015). Ministerio Público - Texto Único del Código Penal de la República de Panamá (Comentado). Panamá: Impresiones CARPAL. Obtenido el 11 de noviembre de 2019
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_pan_res_ane_act_corr_2.pdf

el delincuente no es un infractor con las condiciones comunes a la mayoría de los casos, sino por el contrario, se trata, generalmente, de alguien con un conocimiento específico, inclusive prestigio, con especial énfasis, en el sistema financiero, inclusive, en el sistema específico en el cual se ha podido o se quiere infiltrar.

Visto lo anterior, resulta necesario respecto a la tipología del delito, remitirnos al contenido del artículo 249 del Código Penal, el cual nos permitimos citar literalmente, para un mayor alcance y comprensión:

“Artículo 249. Quien en beneficio propio o de un tercero use o divulgue indebidamente información privilegiada, obtenida por una relación privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a ocho años. Para efecto de este artículo, se considerará información confidencial la que, por su naturaleza, puede influir en los precios de valores y que aún no ha sido hecha del conocimiento público”.

Utilizando la hermenéutica jurídica, debemos tener presente respecto a la lectura del citado artículo que se trata de un hecho ocurrido en el ámbito del mercado de valores, y que el mercado de valores no es una entidad creada por el derecho penal, ya que este no crea derechos como bien expresa el maestro Eugenio Zaffaroni, ni mucho menos entidades.

Como derivado de lo anterior, el Código Penal en estos casos, protege un marco regulatorio externo a su actividad per se, entiéndanse las instituciones que como tal se encuentran en la Ley del Mercado de Valores, lo cual se traduce en primera instancia como la protección del bien jurídico patrimonial individual y, por otro lado, la regulación jurídica del mercado, lo cual conlleva, en este orden, la obligación del jurista de adentrarse en ambas ramas del derecho al momento de conocer acerca de un caso con ese perfil.

Así, debemos tener presente que el bien jurídico protegido como en el común de los delitos Contra el Orden Económico, es justamente el orden de la economía nacional, por tanto, aun cuando exista, quizá, lesión en el patrimonio individual de los inversionistas, el sujeto pasivo ante la afectación a la economía lo sigue siendo el Estado.

Respecto a la configuración del tipo penal y los verbos rectores de la conducta, podemos observar que el legislador ha utilizado los verbos usar o divulgar como medio de la acción del

sujeto activo, y que, en su efecto, este uso o divulgación, sea sobre información privilegiada. Como resultado, el sujeto activo será la persona que tenga el acceso a este tipo de información y la utilice a su favor como medio para sus inversiones, o que, suministre la información a un tercero para que este realice inversiones sobre la base privilegiada obtenida.

Cabe señalar que estamos ante un delito de resultado, cuando la normativa penal es enfática en establecer que debe obtenerse un beneficio y además debe existir un perjuicio como resultado de la acción, siendo además un delito por comisión, con características eminentemente dolosas, por lo cual, no es compatible con algún tipo culposos.

Es propicio agregar que la excerta legal en estudio lleva intrínseca una definición cuando establece que se considerará información confidencial la que, por su naturaleza, puede influir en los precios de valores y que aún no ha sido hecha del conocimiento público.

Ahora, es necesario para comprender el tipo penal (ya mencionamos que es necesaria la versatilidad tanto en derecho penal como en derecho bursátil), que un mercado eficiente supone entre otros aspectos, que:

- i) los precios se forman con objetividad y justicia;
- ii) todos los inversionistas tienen igualdad de acceso al mercado y a la información disponible;
- iii) las sociedades emisoras tienen una amplia obligación de suministrar toda información que sea relevante para el mercado;
- iv) está prohibida--y es reprimida--la obtención de utilidades en el mercado con base en información privilegiada, esto es que no sea de conocimiento del público; y
- v) dicha conducta es sancionable tanto desde el ámbito del derecho administrativo como del derecho penal.⁷

Esto, como explicamos, permite la igualdad entre los inversionistas, de manera que, al momento de realizar sus inversiones, no exista ventajas entre uno y otros. En este sentido, existirá siempre información de carácter confidencial, es decir, no accesible al público, y que pudiese modificar los precios de los instrumentos financieros en el mercado. Una pregunta idónea en este momento podría ser: ¿qué información puede influir? Veamos unas alternativas:

7 Torrado Angarita, Jorge (2008). EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE. Revista de Derecho Privado. Colombia. Fecha de consulta 20 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033187004.pdf>

- Cambios o alteraciones de importancia en el objeto social o actividades del emisor.
- Venta o adquisición de activos de importancia que representen o excedan el 10% del patrimonio del emisor.
- Renuncia o remoción de alguno de los miembros de la Junta Directiva, de miembros del personal gerencial y/o ejecutivo que se menciona en la Sección V, Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, Empleados de Importancia y Asesores.
- Actos y hechos de cualquier naturaleza que se presenten y puedan constituirse en obstáculos de importancia para el desarrollo de las actividades del emisor, especificando sus implicaciones en el negocio de la compañía.

Así, si alguien, a sabiendas de esta información, la utiliza a su favor, provoca uno de los elementos del tipo penal, toda vez que ese conocimiento lo coloca en una posición privilegiada respecto al resto de inversionistas. Cabe señalar que, además de la información privilegiada, quien la obtiene, debe encontrarse en una relación privilegiada, por tanto, se entiende que en ella pudiesen incurrir directores, contadores, dignatarios, auditores, abogados, banqueros, y afines.

De acuerdo al tenor de la norma, no bastaría el uso de la información privilegiada, y el beneficio en este orden, sino que para que sea de interés jurídico-penal, deberá causarse un perjuicio a inversionistas o al público.

IV. Algunos aportes desde la perspectiva procesal e investigativa

Estas investigaciones, desde un enfoque tanto del derecho penal como el aporte que se puede hacer a los estudiantes de Criminalística como organismos de investigación criminal, deben valorarse siempre como punto de partida, sobre el tamiz del debido proceso. A este propósito compartimos el criterio del jurista chileno Mauricio Duce respecto a que debemos comprender que el debido proceso, no es un tema derivado del ius puniendi sino una protección prevista en la Constitución y en la legislación internacional aplicable para las personas cuyos derechos y obligaciones se determinan en diversos ámbitos⁸. De manera tal que, atendiendo además el principio de legalidad, su investigación y descubrimiento debe ser en estricto apego del Código Procesal Penal, ahora de corte acusatorio en toda la República de Panamá, el cual establece respecto al inicio de la acción penal pública de la siguiente manera:

“**Artículo 111.** Acción penal pública. Cuando el Ministerio Público tenga noticia sobre la existencia de un hecho de carácter delictivo, perseguible de oficio, ejercerá la acción

8 MAURICIO, D. (2018). “Entre responsabilidad penal y administrativa – Reflexiones sobre el proceso sancionatorio administrativo chileno: debido proceso, estándar de convicción (prueba) y el alcance del sistema recursivo”. *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2018, páginas 86-87. Italia.

penal con el auxilio de los organismos policiales correspondientes, cuando proceda” (el resaltado es nuestro).

En este sentido, de manera breve podemos señalar unos aspectos relevantes en cuanto a la función tanto del Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial (OJ):

- La conducta es perseguible de oficio.
- Bajo el principio de igualdad de partes y por el tipo de delito, el MP estará en desventaja.
- La investigación preliminar es vital para completar el caso (Art.272 CPP).
- **Importante para las ciencias forense, el MP puede asistirse de peritos (igual la defensa).**
- Bajo principio de motivación, tanto el MP como el OJ, han de “conocer la materia”.
- Bajo principio de justicia en tiempo razonable, los plazos son cortos, salvo la declaratoria de investigación compleja o extensión del término de instrucción.
- Admite presentación de acuerdos entre el MP y la parte.
- La carga de la prueba recae sobre el MP.
- Cabe la detención preventiva.
- El detenido preventivamente no puede ser trasladado fuera del área en que se cometió el delito, solo en caso de que proceda Blanqueo de Capitales (Art.239 CPP).
- Admite fianza de excarcelación.
- Como delito precedente al blanqueo de capitales (autónomo), la carga de la prueba corresponde a la parte (Art. 257 CPP) en caso de aprehensión de bienes.
- Muy importante, cabe el secuestro penal.
- Revelación de evidencia en fase de acusación.
- Importancia del Informe de Análisis.

Desde la perspectiva de investigación criminal, debemos tener presente que estamos ante un delito complejo, máxime en el entorno en el cual nos encontramos, y con las limitaciones en materia de tecnología, presupuesto, estructura, entre otros. Por tanto, para su comprobación o desvinculación (en caso de la defensa), será importante el apoyo técnico que al respecto puedan ofrecer instituciones especializadas en el mercado de valores tales como: Bolsa de Valores de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, entidades bancarias.

De igual manera no puede soslayarse la importancia de análisis a través de otros medios como los analistas financieros o herramientas que la propia tecnología nos ofrece, además de, justamente, la función que como investigador un criminalista puede aportar como línea del tiempo, análisis de

las transacciones, entrevistas, fotografías, análisis de los lugares de los hechos y documentación correspondiente.

CONCLUSIONES Y ANEXOS

Como hemos podido observar estamos ante un tipo penal específico, poco común y cuya técnica de investigación criminal tiene unos matices interesantes donde se conjuga la parte jurídica con la pericial, y donde todos los intervinientes ya sea desde la perspectiva de la acusación como de la defensa, se ven forzados a ampliar sus conocimientos respecto a una rama específica, algo distinta del derecho penal, como lo es el mercado de valores.

Nos pareció oportuno, como objeto del presente análisis, hacer una distinción necesaria e introducir dos tipos penales, que tipifican conductas delictivas respecto de aquellas personas que, por determinadas circunstancias, en este caso, servidores públicos, pueden utilizar con propósito criminal información confidencial, lo cual nos permitirá finalmente, en paralelo con otras conductas, tener una perspectiva del acceso a información privilegiada, y nos permitimos citar:

Corrupción de Servidor Público:

“**Artículo 348.** El servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero información o dato de carácter reservado o confidencial y de acceso restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo será sancionado con prisión de cuatro a ocho años” (el resaltado es nuestro).

Delitos Relacionados con Droga:

“**Artículo 317.** El servidor público que use para su propio beneficio o dé a conocer a un tercero no autorizado, información confidencial relacionada con sustancias químicas o precursoras, que reciba u obtenga en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de seis a ocho años” (el resaltado es nuestro).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barsallo, C. (2006). Aportes del Mercado de Valores. Panamá. Superintendencia del Mercado de Valores.
2. Castillo, Montero y Montilla (2019). Introducción a los sistemas financieros. Córdoba, España. Escuela Francisco Largo Caballero.
3. CASTRO, A. (2015). Ministerio Público - Texto Único del Código Penal de la República de Panamá (Comentado). Panamá: Impresiones CARPAL. Obtenido el 11 de noviembre de 2019 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_pan_res_ane_act_

corr_2.pdf

4. López y González (2008). Gestión Bancaria, factores claves en un entorno competitivo. España. McGraw Hill 3ª edición.
5. MAURICIO, D. (2018). “Entre responsabilidad penal y administrativa – Reflexiones sobre el proceso sancionatorio administrativo chileno: debido proceso, estándar de convicción (prueba) y el alcance del sistema recursivo”. *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2018, páginas 86-87. Italia.
6. Quiroga, M., Dykinson, G. (2011). Métodos alternos de solución de conflictos: herramientas de paz y modernización de la justicia. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioumecitsp/detail.action?docID=3198689>. Created from biblioumecitsp on 2019-08-19.
7. Roselló, R. (2011). Introducción al mercado de capitales. Compendio de Mercado de Valores. Lima, Perú. Ediciones Legales.
8. Texson Alarcón, G. G. (2005). Diseño de un simulador de vuelo para la compra y venta de acciones en el mercado accionario mexicano, Cap. 3. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo3.pdf Visto el 19 de nov. de 19.
9. Torrado, J. (2008). El uso indebido de información privilegiada en el mercado de valores colombiano a la luz de la experiencia estadounidense. *Revista de Derecho Privado*. Colombia. Fecha de consulta 20 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033187004.pdf>

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de la República de Panamá.
2. Código Procesal Penal de la República de Panamá.
3. Código Penal de la República de Panamá.
4. Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999.

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO BANCARIO



Migdalia E. Gutiérrez Quintero
Abogada Privada
m06h22@gmail.com

Fecha de recepción: 25/08/2019

Fecha de revisión: 12/09/2019

Fecha de aceptación: 03/10/2019

RESUMEN

El derecho bancario como fuente del conocimiento jurídico especializado en un ámbito que incluye un estudio multidisciplinario, técnico y complejo, es una rama poco explorada por la literatura en especial por la literatura jurídica panameña. Esta rama del derecho viene a suponer una especialidad jurídica que evidentemente tiene su desarrollo sobre la actividad de una empresa, el banco, pero que, por otro lado, tiene a su sujeto de protección, el cual lo hace conforme a criterio de la autora una rama del derecho eminentemente pública, en la persona entendida como consumidor bancario. Así, ante la captación de fondos del público y ante la clara importancia que reviste en todo el sistema financiero, el derecho bancario tiende a enmarcar todo este ámbito de estudio y a encontrar las mejores fuentes de regulación del sector que per se es ampliamente regulado, en el caso panameño, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Palabras clave: Bancos, consumidor bancario, derecho bancario, supervisión, regulación.

BRIEF CONSIDERATIONS ON BANKING LAW

ABSTRACT

Banking law as a source of specialized legal knowledge in an area that includes a multidisciplinary, technical and complex study, is a branch little explored by the literature, especially by the Panamanian legal literature. This branch of law comes to suppose a legal specialty that obviously has its development on the activity of a company, the bank, but that, on the other hand, has its subject of protection, which does so according to the author's criteria. eminently public branch of law, in the person understood as a banking consumer. Thus, in the face of fundraising from the public and the clear importance of the entire financial system, banking law tends to frame

this entire field of study and to find the best sources of regulation in the sector that per se is widely regulated, in the Panamanian case, through the Panama's Superintendency of banks.

Key words: Banks, consumer banking, banking law, capital, economics, supervision, regulation, law.

INTRODUCCIÓN

El derecho bancario, es la fuente base de estudio de toda la estructura jurídico – bancaria. Este nos brinda los medios por los cuales resulta viable el desarrollo de toda la normativa que lo compone, considerando sobre todo que se trata de un mercado autónomo, que cuenta con la facultad de autorregularse y altamente supervisado.

Panamá, como sabemos, es reconocido centro financiero internacional, y en este sentido, su fuerte financiero, por encima de todos los otros componentes de este mercado, lo es la banca, la cual tiene mayor representatividad. Sin embargo, no se puede soslayar como a partir del año 2015 (no se puede tampoco rechazar que antes ya existían situaciones), a raíz de los conocidos o mal llamados “Panama Papers”, se ha dado un giro extraordinario a todo el tema regulatorio y existe una amplia observación de entidades de carácter internacional sobre nosotros.

Pero la banca en Panamá no es nueva, no es ahora que la vemos reflejada no sólo en números, sino también en mega estructuras de ingeniería y tecnología de punta, por el contrario, la historia bancaria panameña se remonta al siglo XIX, en concordancia con la construcción del ferrocarril y el proyecto del canal francés, donde se escucha de entidades como el Exchange Bank of Colon en 1866 y el Saving Bank en 1885, no obstante, adentrados en nuestra época republicana, ya podemos hablar del Banco Hipotecario y Prendario¹, ahora Banco Nacional de Panamá creado en 1904 a través de la Ley 74 del 13 de junio de 1904, que con apenas veinticinco artículos regulaba a esta entidad bancaria.

Se establecía ya en aquel entonces, su calidad sensitiva y regulada, bajo un régimen de supervisión y fiscalización, cuando el artículo 9 establecía que si bien, se trataba de una entidad autónoma, estaba sujeta a la inspección del Poder Ejecutivo a la vez que establecía que el Secretario de Hacienda haría una visita de fiscalización mensualmente al establecimiento, conceptos que ahora, son pilares de la correcta operatividad de la actividad bancaria.

¹ Lezcano Navarro, José María. Sistema Bancario Panameño. Panamá. Cultural Portobelo, 2015.

SU VINCULACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

Ahora bien, como hemos venido esbozando, el mundo bancario gira alrededor de otras ciencias, disciplinas y técnicas, no precisamente jurídicas, siendo su foco principal el fantástico mundo financiero. De tal manera, debemos precisar que las finanzas hacen referencia a la forma de inversión o financiación, por parte de un individuo, sea persona natural, empresa o una entidad del Estado, de los fondos que necesita para sus operaciones y de los criterios con que dispone de sus activos.

Bajo esta óptica, algo que debemos tener siempre en perspectiva que versa sobre condiciones y oportunidades dirigidas a conseguir el capital, su uso, además de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones (Baena Toro, 2012).

Precisando ese enfoque, tenemos por un lado a quien capta dinero, y por el otro, a quien lo cede, sentido en el cual debemos saber que se trata de un mercado que opera bajo un principio fundamental: **la confianza**.

La confianza en el sector financiero tiene su génesis fundamental en el hecho real e innegable que las personas (su mayoría), entregan a un tercero lo que supone en el común de los casos el fruto de su esfuerzo y en otros muchos supuestos el capital de su vida, motivo por el cual actúa bajo la presunción de que su dinero será debidamente custodiado y a su vez confiado (precisamente), que quien lo tiene a su resguardo actúa con la diligencia de un buen padre de familia o como el argot jurídico financiero entiende, con la diligencia que los hombres emplean en sus propios negocios.

Como corolario de lo expuesto, haciéndome eco de publicación del profesor Ogami Rivera, queda evidenciado que si determinada persona acude a la utilización de un servicio en el cual puede estar colocando gran parte de los recursos que componen su economía, el Estado como tal debe tener una injerencia aunque fuese mínima, sin que esto pueda ser llamado por algunos un gesto de socialismo, toda vez que el Estado debe supervisar y regular que dicha actividad destinada a captar recursos del público, no sea abusiva ni afecte al cliente².

Pero hemos partido de la especie, porque el sistema financiero opera sobre la base de su género, y hablamos en este sentido de la economía. Aquella que en el común de los ciudadanos es entendida justamente como un tema meramente de dinero, y traducido a derecho, entendido como una actividad meramente comercial, sin embargo, la realidad nos habla de la economía como

² Rivera Cano, Ogami R. Los Organismos de Supervisión Financiera y su Incidencia en la Prevención de la Actividad Delictiva. Revista CATHEDRA. Panamá. UMECIT, 2019.

ciencia social, bajo su premisa de distribución de recursos y servicios de la manera más efectiva para satisfacer las necesidades colectivas, de ahí que en derecho hablemos de una actividad sujeta a regulación del derecho público.

Ese contexto nos permite matizar justamente el por qué consideramos que hablamos de una relación de género a especie. Valoramos que dentro de esos mecanismos de distribución de riquezas, esa famosa “búsqueda de la felicidad”, este concepto utópico donde todos podamos tener el mayor acceso efectivo a las riquezas, está la labor que pueda realizar el mercado financiero para estos propósitos.

Vemos entonces el marco principal de nuestro enfoque, economía y finanzas. Ahora, si estas dos actividades las examinamos sobre la premisa que esbozó nuestro Pleno de la Corte Suprema de Justicia³ al entender que el Derecho, como conjunto de normas que rige la relación y vida en sociedad, surge de la necesidad de crear orden y procurar el respeto a la individualidad, con el objeto de lograr los fines comunes y colectivos, podemos aseverar en palabras llanas que, el derecho está en toda actividad de la vida cotidiana, lo cual nos lleva ahora a precisar la existencia en este desarrollo del derecho bancario a dos grandes parientes, el derecho económico y el derecho financiero.

El derecho económico puede definirse como un conjunto de normas que permiten al Estado intervenir o regular la actividad económica pública y privada, a nivel nacional e internacional para hacer prevalecer el interés económico general (RAMÍRES, R., 2018)⁴. Lo anterior es cónsono con el artículo 282 de la Constitución Política de la República de Panamá cuando en él se plasma que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, **según las necesidades sociales**, es decir, priva el interés colectivo por encima del interés particular.

Por otro lado, en cuanto a nuestro otro actor, debemos tener presente que el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado.

Siendo ello, el estudio jurídico entiende esta actividad financiera desde un enfoque clásico, inicial a toda conceptualización de derecho como “conjunto de normas”, sin embargo es preciso tener luces largas y ver la extensión de la misma en cuanto a lo que realmente comprende la actividad financiera del Estado (Villegas, 2001), es decir, proyectarse en el hecho cierto de la

³ Corte Suprema de Justicia – Pleno -. 17 de julio de 2020.

⁴ Ramírez Hernández, Ricardo. Manual de Derecho Económico. México. Fondo de Cultura Económica, 2018.

intervención directa del Estado en las diferentes actividades financieras de la política estatal, desde roles estrictos de regulación y vigilancia, además del poder sancionador, pero considerando además, el rol de motivador y creador de espacios que debe tener el Estado siempre actuando desde el marco del principio de legalidad.

En este punto, así como Ferreira, hay que subrayar, que el Derecho financiero positivo se mueve, con más frecuencia de la que sería de desear a impulsos de recomendaciones técnicas no jurídicas, económicas y contables fundamentalmente, olvidando las enseñanzas que la Ciencia del Derecho aporta en cuanto a las exigencias técnicas que toda norma jurídica debe cumplir (Ferreiro Lapatza, 2016), responde así a otros factores, pero no se puede ceder en demasía ante otras disciplinas si no que también se debe concebir la técnica jurídica que permite una correcta estructuración legal.

EL DERECHO BANCARIO DESDE SU CONCEPTO

Conforme expone la Dra. Alicia Rendón el Derecho Bancario puede definirse como un conjunto de normas jurídicas de Derecho Público y Privado que regulan la prestación del servicio de la banca y crédito, la autorización y funcionamiento de las instituciones bancarias e intermediarios financieros bancarios y la protección de los intereses del público mediante las facultades otorgadas a las autoridades financieras.

Esta definición en concordancia a los criterios de Blossiers, conlleva un doble aspecto:

1. Una concepción de Derecho Público Administrativo, en cuanto se presenta el concepto del estudio jurídico de banco y del ejercicio de la profesión del banquero.
2. Una concepción de Derecho Privado, en el sentido que está regido por las operaciones bancarias las cuales se ven materializadas por contratos entre clientes y banco (Mazzini, 2013).

Sin embargo, pese a lo anterior, desde un enfoque de la normativa bancaria panameña y con fundamento en la naturaleza jurídica de la propia existencia del marco normativo, entiéndase, la protección suprema al consumidor bancario y las facultades de supervisión y fiscalización estatal, sin ánimo de entrar en esta diatriba jurídica ya retórica respecto a si estamos ante derecho público o privado e incluso una línea ecléctica, me inclino a pensar que estamos ante una rama del derecho, de un carácter profundamente público que, como otras ramas del derecho, obtiene sus nutrientes de aquello que en la dogmática jurídica conocemos como fuentes.

FUENTES DEL DERECHO BANCARIO

Siguiendo a la Dra. Rendón, en materia de derecho bancario hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primeras, dirigidas a regular de manera específica y exacta la banca y por otro lado tenemos entonces aquellas normas que de una u otra manera realizan un rol supletorio que completa aquellos temas que por alguna circunstancia no halla lugar en la norma especial.

Las fuentes primarias se constituyen por las legislaciones especializadas que regulan al Derecho Bancario, que remiten a su vez a las normas reglamentarias o supletorias. También podemos considerar de esta forma, a las normas que emiten autoridades financieras, en el caso panameño los Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Oficios o cualquier otro acto administrativo que en este sentido emita la Superintendencia de Bancos de Panamá.

En un segundo supuesto como bien hemos esbozado tenemos entonces las fuentes supletorias, que como bien se deja por sentado por algunos doctrinarios, incluye:

- los usos y costumbres;
- la jurisprudencia en la materia,
- la doctrina;
- los principios generales del derecho.

PRINCIPALES INTERVINIENTES EN LA BANCA:

Banco: Los bancos son personas jurídicas, que llevan a cabo la actividad bancaria, a través de las correspondientes licencias que, en el caso de Panamá (Jiménez Sandoval, 1986).

Banqueros: Entendemos lo más sencillo posible por aquel a la persona física que ejercerá las funciones operativas y/o administrativas bancarias destinadas a cumplir los propósitos de esta entidad financiera.

Cliente: Persona Natural o jurídica, según sea definida por las disposiciones legales que rigen la actividad financiera, con la cual el sujeto regulado mantiene o ha mantenido, de forma habitual u ocasional, una relación contractual profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad.

Regulador: El ente regulador viene a representar el conjunto de entes conformados por las autoridades que gobiernan, regulan y supervisan, así como las que operan en los mercados del ahorro, la inversión, el crédito y los servicios auxiliares de los mismos. Los organismos de supervisión son

las entidades de carácter estatal que tienen por fin realizar la inspección, la vigilancia y el control del sistema financiero para garantizar la transparencia de las operaciones y la confianza del público en las entidades financieras⁵.

ALGUNAS CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS

En Panamá, a propósito de la regulación financiera y no financiera a través de la Ley 23 de 2015 se establece numeros clausus la siguiente estructura de entidades reguladoras de actividades financieras y ahora incluso no financieras:

1. La Superintendencia de Bancos de Panamá.
2. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3. La Superintendencia del Mercado de Valores.
4. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
5. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo.

Con la especialidad bancaria, en Panamá tenemos el Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008” el cual da estructura a la Superintendencia de Bancos de Panamá y en base a jerarquía normativa, establece las pautas a seguir en esa materia, dando claridad en su artículo que dentro de los objetivos de la Superintendencia está el velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario, fortalecer y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de la República de Panamá como centro financiero internacional, promover la confianza pública en el sistema bancario, velar por el equilibrio jurídico entre el sistema bancario y sus clientes.

Evidentemente ante la brevedad del presente artículo, resulta imposible explayarnos en distintos aspectos, a propósito de lo anterior dejamos algunas referencias normativas de estudio obligatorio como complemento a la actividad bancaria panameña:

Ley 51 del 24 de octubre de 2016: Por medio de la cual la República de Panamá legaliza los lineamientos para que las Instituciones Financieras apliquen los procedimientos de debida diligencia a partir del 1 de enero de 2017 y en el año 2018 hagan el reporte de información de cuentas financieras.

- Decreto Ejecutivo 363 de agosto 2015: Reglamenta las disposiciones de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento

⁵ Córdoba Padilla, Marcial. Mercado de valores. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2015. ProQuest ebrary. Web. 31 October 2016. Copyright © 2015. Ecoe Ediciones. All rights reserved.

del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

- Acuerdo 10-2000 SBP: Establece la obligatoriedad del “Programa de Cumplimiento”, del Oficial de Cumplimiento, requisitos para el cargo y funciones.
- Acuerdo 5-2015 SBP: Prevención del uso indebido de los servicios bancarios por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Resolución 1267,1988, 1373, 1718, 1737, 1540: Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Ley 51 de 24 de octubre de 2016: Reporte de Registros FATCA (2014, 2015 y 2016).
- Ley 47 de 24 de octubre de 2016: Por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos De América para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la Ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) y sus anexos, dado en la ciudad de Panamá, el 27 de abril de 2016.
- Decreto 124 de 12 de mayo de 2017: Reglamentación de la Ley 47 y Ley 51 – FATCA CRS.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

- Basilea

Como bien describe Baena el Comité de Basilea, fue establecido como el Comité en Regulación Bancaria y Prácticas Supervisoras, por los bancos centrales del Grupo de los Diez (G-10) a finales de 1974 como resultado de la turbulencia monetaria y bancaria internacional.

Es sabido por los juristas que en tiempos actuales la convencionalidad deja de ser un tema limitado al derecho constitucional o penal, si no que los convenios como marcos de regulación de la actividad jurídica de determinado país, en un sentido contrario a lo que expresaba la famosa pirámide de Kelsen, vienen a significar normativa que supera incluso a los mandatos Constitucionales y de hecho componen, el bloque de constitucionalidad, motivo por el cual el abogado que experimenta en el ejercicio de sus funciones actividad propia del derecho bancario, se ve en la obligación de conocer respecto a estos aspectos.

Determinante desde este enfoque del rol de esta entidad fundamental de la regulación financiera internacional, en su función como instrumento o canal de comunicación entre los Estados partes frente a los famosos acuerdos de intercambio de comunicación e información (a veces cuestionado por la falta de reciprocidad de los grandes países versus los más pequeños), entiéndase como lo que

se conoce en derecho internacional como el principio de reciprocidad que en este sentido, permitirá una mejor supervisión bancaria lo que deviene en un mejor cumplimiento por parte de los Estados de control en cuanto a las actividades financieras. Según se desprende, el Comité se basa en:

- el intercambio de información a través de acuerdos nacionales de supervisión;
- el desarrollo de una mayor efectividad de las técnicas de supervisión para bancos internacionalmente activos; y
- el establecimiento de estándares mínimos de supervisión.

Consideraciones finales

Sobre la base de lo anterior no podemos pasar por alto que, ante las premisas esbozadas respecto al derecho económico, como bien apunta Castro, el Derecho Económico faculta al Estado para la Dirección de la Economía, en conjugación con el derecho penal que le permite ejercer el ius puniendi y fijar las conductas prohibidas, así como las sanciones que corresponden por su infracción, independiente del sector al que pueda afectar (Castro, D., 2017).

Dentro de toda esta actividad económica, reiteramos, la bancaria, es punto de inflexión donde el Estado es el encargado de determinar las políticas necesarias para la prevención de distintas conductas punibles que de alguna manera pueden hacer impacto en este mercado financiero bajando precisamente su confianza. Tal es el caso del delito de Blanqueo de Capitales a partir de Organizaciones Criminales, tema sobre el cual hemos adquirido experiencia tanto desde el sector público en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado como en sector privado, y que bien define el reconocido jurista patrio, Dr. Boris Barrios como el “ilícito penal”, cuyo modo consiste en disfrazar o disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilegales o delictivas como si fueran lícitos, con el propósito de darle apariencia de legalidad y convertirlo en dinero de curso legal.

Estas conductas delictivas son realizadas por lo que se define como la delincuencia de cuello blanco, es decir, la violación de la ley criminal por parte de una persona de alto nivel socioeconómico en el desarrollo de una actividad profesional. Esta posición de persona respetable, es la que le permite ejercer con mayor o menor éxito, suficiente influencia para impedir la intervención de la víctima o del aparato de persecución estatal⁶.

6 Penagos, Luis y Lugo, Danilo. Oficial de Cumplimiento, Procedimiento Operativo de cumplimiento obligado de acuerdo con las leyes y estándares internacionales. Publicación de United States InterAmerican Affairs. Washington, 2012.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASCOM. (2017). Libro Blanco Sobre la Función de Compliance. Madrid, España: Asociación Española de Compliance.
2. Baena Toro, D. (2012). Sistema financiero colombiano. . Bogotá, Colombia.: Ecoe Ediciones.
3. Barrios González, Boris (2019). Blanqueo de Capitales, Marco Normativo de Prevención y Sanción en la República de Panamá. Librería y Editorial Barrios & Barrios. Panamá.
4. Castro, Delia A. (2017). Los delitos contra el orden económico en el Código Penal (Primera parte). Impresiones Carpal. Panamá.
5. Diccionario Jurídico ESPASA. (2001). Madrid España: Editorial Espasa Calpe, S.A.
6. La Estrella de Panamá. (29 de abril de 2020). <https://www.laestrella.com.pa>. Obtenido de <https://www.laestrella.com.pa/economia/200108/delegacion-panamena-reune-representantes-gafi>
7. Lerner, J. (1997). Venture capital and private equity: a course overview. USA: Harvard Business School and National Bureau of Economic Research.
8. Lezcano Navarro, José María. (2015) Sistema Bancario Panameño. Panamá. Cultural Portobelo.
9. Lugo C., D. (2020). El Oficial de Cumplimiento y sus Funciones Operativas. Washington, DC.: Library Of Congress.
10. Naciones Unidas (2008). Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros. Oficina Contra la Droga y el Delito. Bogotá.
11. Pampillón Fernández, F., Cuesta González, Marta de la, and Ruza y Paz Curbera, Cristina. (2009). Introducción al sistema financiero. Madrid, ES: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. ProQuest ebrary. Web. 31 October 2016. Copyright © 2009. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. All rights reserved.
12. Penagos, Luis y Lugo, Danilo. (2012). Oficial de Cumplimiento, Procedimiento Operativo de cumplimiento obligado de acuerdo con las leyes y estándares internacionales. Publicación de United States InterAmerican Affairs. Washington.
13. Rendón López, Alicia. (2019). Guía de Estudio de Derecho Bancario y Bursátil. Universidad Nacional Autónoma de México.
14. Rivera Cano, Ogami R. (2019). Los Organismos de Supervisión Financiera y su Incidencia en la Prevención de la Actividad Delictiva. Revista CATHEDRA. Panamá. UMECIT.
15. Virgala Foruria, E. (2012). Los organismos reguladores en la crisis económica: su reformulación en la Ley de Economía Sostenible. Madrid, España: Revista Española de Derecho Constitucional, núm 094. CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

16. Virgala Foruria, E. (2016). Los organismos reguladores en la crisis económica: su reformulación en la Ley de Economía Sostenible. *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm 094. Madrid.

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de la República de Panamá.
2. Ley 23 de 27 de abril de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”
3. Ley del Mercado de Valores (Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que compone el Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes reformativas, y el Título II de la Ley 67 de 2011).
4. Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, “Que adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008” (ley bancaria).
5. Ley 51 de 24 de octubre de 2016: Reporte de Registros FATCA (2014, 2015 y 2016).
6. Ley 47 de 24 de octubre de 2016: Por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos De América para mejorar el cumplimiento tributario internacional y para ejecutar la Ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras (FATCA) y sus anexos, dado en la ciudad de Panamá, el 27 de abril de 2016.
7. Decreto Ejecutivo 363 de agosto 2015: Reglamenta las disposiciones de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
8. Decreto 124 de 12 de mayo de 2017: Reglamentación de la Ley 47 y Ley 51 – FATCA CRS.
9. Acuerdo 10. (15 de Diciembre de 2015). Superintendencia del Mercado de Valores. Obtenido de Acuerdos y Resoluciones: www.supervalores.gob.pa
10. Acuerdo N°10. (15 de Diciembre de 2000). Superintendencia de Bancos. Obtenido de Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá: [Oficial%20de%20cumplimiento/Acuerdo_10-2000-SBP-OC.pdf](#)
11. Acuerdo 10-2000 SBP: Establece la obligatoriedad del “Programa de Cumplimiento”, del Oficial de Cumplimiento, requisitos para el cargo y funciones.
12. Acuerdo 5-2015 SBP: Prevención del uso indebido de los servicios bancarios por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
13. Resolución 1267,1988, 1373, 1718, 1737, 1540: Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

ABORDAJE CRIMINALÍSTICO Y PENAL DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO



Orlando Gutiérrez Robayo

Dirección Nacional de Escuelas. Policía Nacional de Colombia
orlandogutierrez939@gmail.com

Fecha de recepción: 15/07/2019

Fecha de revisión: 22/08/2019

Fecha de aceptación: 13/09/2019

RESUMEN

Distintos episodios de siniestralidad vial (hechos de tránsito) a los que se suma decisiones judiciales a favor de la libertad de conductores imputados de delitos cometidos con ocasión de la conducción de un automotor son, en gran medida, los factores que obran de disparador de normatividad. Lo que se pretende es suministrar alguna solución a todos los conflictos sociales, o cuanto menos, a los que se considera más importantes, aunque en la realidad no lo sean. De este modo, el derecho penal -otrota entendido como de mínima intervención-, avanza hacia una penalización indiscriminada de conductas que, en muchos casos, ni siquiera ponen en riesgo un determinado bien jurídico. Ante la ocurrencia de un hecho criminal (o no criminal, pero que la sociedad reclama que lo sea) de gran impacto social, observamos una inmediata reacción de la política pregonando a los cuatro vientos la reforma penal para solucionar rápidamente el conflicto, ya sea modificando y creando nuevas normas como agravantes punitivos, particularmente sometidos a una severa penalidad o bien endureciendo las penas de tipos penales ya existentes, pretendiendo con ello brindar soluciones por lo general meramente simbólicas o formales, más orientadas a calmar la voracidad popular que a dar una real solución al conflicto social.

Palabras clave: Tránsito, Principios, Criminalística, Primer Responsable, Funciones.

CRIMINALISTIC AND CRIMINAL APPROACH TO TRANSIT FACTS

ABSTRACT

Different episodes of road accidents (traffic events) to which judicial decisions are added in favor of the freedom of drivers charged with crimes committed on the occasion of driving a car and the persistent claims of Civil Associations to incorporate the so-called Criminal Code Traffic

offenses are, to a large extent, the factors that act as a trigger for regulations. What is intended is to provide some solution to all social conflicts, or at least, to those considered most important, although in reality they are not. In this way, criminal law - another understood as minimal intervention - is moving towards an indiscriminate criminalization of behaviors that, in many cases, do not even put at risk a certain legal good. Given the occurrence of a criminal act (or not criminal, but that society claims it to be) of great social impact, we observe an immediate reaction of the policy by calling the four winds the criminal reform to quickly resolve the conflict, whether creating new criminal types of suspicious constitutionality, particularly subject to a severe penalty or hardening penalties of already existing criminal types, thereby seeking to provide solutions usually merely symbolic or formal, more oriented to calm popular voracity than to give a real solution to social conflict.

Key words: Transit, Principles, Criminalistics, First Responsible, Functions.

INTRODUCCIÓN

La seguridad en la evitación de accidentes por la conducción de un vehículo automotor presupone la existencia de tres elementos que se retroalimentan e interrelacionan entre sí: infraestructura vial (mal estado de calles en zonas urbanas, suburbanas y rutas o carreteras, ausencia de autopistas, de rotondas, de iluminación, deficiente señalización y marcación, semaforización insuficiente, ausencia de elementos tecnológicos, etc.), vehículo (mal estado del automóvil, sin ajustarse a los reglamentos de tráfico y revisiones técnico mecánicas) y conductor (“factor humano”, situación física y psíquica al momento del siniestro, edad, género, conocimiento y actitud o predisposición de respeto hacia las normas de tránsito, etc.).

La ausencia de uno o varios de estos factores ha contribuido a que en la sociedad se vaya instalando, progresivamente, un sentimiento subjetivo de inseguridad frente a los siniestros viales y una creciente demanda de penalización. Para muchos, la idea de “tolerancia cero”, es la llave de paso de una política criminal efectiva en materia de seguridad vial. Ya no importa tanto la presencia de aquellos factores en la incidencia de los siniestros viales, sino que se insiste sobre la idea de que el derecho penal es la solución para estos dramas cotidianos que representan las muertes y lesiones en accidentes de tránsito, idea que es alimentada por una suerte de complicidad legislativa en la adopción de una política de mano dura a través de la sanción de leyes punitivas severas para “combatir” con éxito la siniestralidad vial y acabar con los conductores rebeldes en el cumplimiento de la ley.

CONSIDERACIONES EN CRIMINALÍSTICA:

Los funcionarios de Policía Judicial adscritos a las Unidades Móviles de Criminalística o quien haga sus veces en el lugar de los hechos, desde el conocimiento de la conducta punible o de su posible comisión, hasta la entrega de los resultados de la actividad técnico científica a la autoridad competente.

Cuando refiere a las “Unidades Móviles de Criminalística” se entenderá, como los funcionarios de Policía Judicial asignados a la inspección y procesamiento del lugar de los hechos o a aquellos funcionarios que por vía de excepción hagan sus veces. Las atribuciones y la tipificación de sus funciones serán de orden Constitucional y Procesal en colaboración con las funciones de la Fiscalía General de la Nación. (Colombia).

Es así como identificar el comportamiento dinámico de la sociedad, tanto en el ámbito criminalístico, criminológico y legal, por lo tanto, es imperioso conocer el actuar del funcionario de Policía Judicial para la inspección y procesamiento del lugar de los hechos, en tal virtud, se propende por lograr la eficiencia en el actuar investigativo, con la prevalencia del derecho sustancial y la sujeción de los principios rectores y garantías procesales.

Teniendo en cuenta un concepto restrictivo del lugar de los hechos, se procede a definirlo y ampliarlo como el espacio físico variable en extensión y dinámico en su estudio, por cuanto aun estando protegido, condiciones como la luz, la humedad, la temperatura, la ubicación geográfica, entre otros aspectos, pueden generar cambios; dado que solo en un primer y único momento, tenemos la oportunidad de observarlo, registrarlo y valorarlo en su estado original.

Pero en esencia, se entiende como lugar de los hechos, a toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha consumado la fase externa de un acto considerado como delito o presumible de tal categorización y que va a requerir una intervención investigativa por parte de funcionarios de Policía Judicial y la realización de labores técnico-científicas.

Es de tener en cuenta que, en la ejecución de la conducta punible, se presentan varios actos direccionados a la consumación del delito, éstos pueden presentarse en varios espacios contiguos o dispersos al lugar objeto de inspección, los cuales deben ser concatenados y estudiados en su conjunto, de manera que también se consideraran como lugar de los hechos.

En lo que respecta al principal propósito de la Unidad Móvil de Criminalística, será el de

suministrar de manera oportuna y precisa el apoyo técnico - científico en la Investigación Criminal, para la correcta administración de la justicia, por consiguiente, la inspección y procesamiento del lugar de los hechos comprenderá las siguientes fases:

1. Protección y preservación del lugar de los hechos.
2. Recopilación de información preliminar.
3. Observación, valoración y planificación.
4. Fijación y documentación del lugar de los hechos.
5. Búsqueda, de elementos materiales probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos.
6. Fijación, recolección, embalaje preservación de elemento material probatorio.
7. Liberación del lugar de los hechos.
8. Fase documental y evaluación.
9. Bioseguridad.

Todas las actuaciones que se realicen con ocasión de la inspección al lugar de los hechos en desarrollo de los actos urgentes o de programa metodológico que requiera de funcionarios uniformados, lo harán con sujeción a las normas internas de imagen corporativa, seguridad y bioseguridad personal, reglamentos de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos; en todo caso, demostrando pulcritud y buena disposición.

La Unidad Móvil de Criminalística debe ser integral y estará en capacidad de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos en búsqueda de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Por consiguiente es necesario que se cuente con un investigador líder asignado a cada caso, quien asumirá las actuaciones dentro de la investigación en la etapa de los actos urgentes, el cual será el encargado de recepcionar la información de primera mano por los medios que éste disponga y a su vez efectuará las verificaciones pertinentes para corroborar los hechos, donde una vez confirmada la información, realizará el reporte de inicio poniendo en conocimiento al fiscal de turno y asumirá la coordinación con la Unidad Móvil de Criminalística; es de anotar que para los casos en que se conozca que alguno de los involucrados en el hecho es un funcionario adscrito a una de las entidades como Policía Nacional o Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI), las diligencias serán asignadas a la otra entidad con funciones de policía judicial; caso contrario cuando el lugar de los hechos sea atendido por las Unidades Móviles de Criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes por su misionalidad son los únicos que pueden conocer estas diligencias; lo

anterior, con el fin de garantizar transparencia en la investigación y evitar conflicto de intereses.

Así mismo es importante resaltar, que el primer responsable es garante exclusivo de la protección del lugar de los hechos hasta la llegada del investigador líder y la unidad móvil de criminalística o quien haga sus veces, por otra parte, los actos direccionados a la protección y preservación del lugar de los hechos, se encuentran íntimamente relacionados a la vocación probatoria de los elementos presentes en el lugar de los hechos y por ende, a la sensibilidad de los mismos; estos aspectos condicionan el tipo de protección a emplear, posteriormente velará por la seguridad del personal de la unidad móvil hasta finalizar la diligencia.

Una vez informados los funcionarios de la unidad móvil de criminalística que deben abocar conocimiento o quien haga sus veces, se trasladarán de manera inmediata al lugar de los hechos, al llegar deben evaluar e implementar medidas necesarias para la protección, preservación del lugar y los elementos hallados, por lo tanto, ejecutarán las siguientes tareas y diligenciarán el formato lista de chequeo para la inspección y procesamiento del lugar de los hechos; resaltando que la misma es de carácter orientativo y no hace parte de los anexos, para su control, así:

- Identificará al primer responsable y recibirá el lugar de los hechos mediante el formato de actuación del primer responsable, para determinar inicialmente si algún elemento ha sido introducido o extraído del lugar de los hechos o si se presentó algún tipo de contaminación; de la misma manera conmina y verifica que el funcionario que funge como primer responsable, haya registrado verazmente las actividades de control de ingreso y salida de personas al interior del lugar de los hechos, así como los relevos efectuados.
- Revisará que el primer responsable haya adoptado las medidas de protección y preservación del lugar de los hechos, acordonando mediante cintas o el uso de barreras físicas, como: cuerdas, barricadas, Policías, vehículos, voluntarios, entre otros.
- Determinará si se requiere ampliar el perímetro a acordonar y el área a ser aislada, teniendo en cuenta la neutralización de factores de riesgo que degraden el valor probatorio de los elementos y si es el caso, el perímetro de la zona protegida será ampliada más allá de los límites de las zonas que tienen alta prioridad.
- Deberá restringir el ingreso de funcionarios u otras personas al interior del lugar protegido; si se hace caso omiso a la orden de no ingresar el jefe de la unidad móvil de criminalística, dejará las constancias en el informe mediante el cual se documenta las

actuaciones realizadas durante la diligencia.

- El personal que integra la unidad móvil de criminalística, al momento de recibir el lugar de los hechos, tendrán jerarquía técnica especial sobre las demás unidades intervinientes, sin embargo, deberán tener en cuenta que para casos relevantes como catástrofes, desastres naturales o accidentes de gran magnitud deberán estar sujetos a lo determinado por Puestos de Mando Unificado (PMU) o centros de operaciones y análisis establecidos por las autoridades locales si los hubiera, con el fin de tomar medidas tendientes a minimizar riesgos de origen físico, biológico, químico, radiológico, entre otros.
- Considerar como mínimo dos anillos de protección, el primero es el más próximo a los elementos materiales probatorios de relevancia, el cual será exclusivo para el ingreso del personal de la unidad móvil de criminalística (Zona de afectación), el segundo como zona operativa para dejar los equipos, herramientas, materiales y otros elementos a utilizar (Zona de Incidencia) después de esta se establecerá la zona de Seguridad.

Si el lugar es abierto, se tomará como referencia la concentración masiva de evidencias y se acordona hasta el EMP más alejado de ésta y como mínimo se establecerá un círculo de protección de no menos de 10 metros, para el segundo anillo de acordonamiento siempre que sea posible.

Si el lugar es cerrado, el acordonamiento se realizará desde la puerta o portón de acceso al inmueble o zonas de este, establecimiento o local, hasta el espacio involucrado, constituyendo el primer círculo al que solo accederán los funcionarios de la unidad móvil de criminalística.

La unidad móvil de criminalística o quien haga sus veces, bajo coordinación del investigador líder asignado para el caso, deberá reunirse con el primer responsable, funcionario público o con la persona que posea la mayor información de relevancia para la investigación, si lo hubiese; luego observará el lugar de los hechos para formular las posibles hipótesis de lo sucedido, las acciones y movimientos de los autores o partícipes, como entraron y como salieron, esto determinará si se debe ajustar el perímetro de protección del lugar de los hechos, de ser necesario se asignará un investigador quien lo realice, el cuál tendrá en cuenta las siguientes labores:

- Verificar los datos suministrados por el primer responsable en el formato actuación primer respondiente, como: el conocimiento del caso, en tal sentido recepcionará metódicamente los datos necesarios para la investigación, como mínimo se deberá registrar:
 - Identificación de la persona o personas que suministran la información y unidades que intervienen.

- ▶ Ubicación referida por el informante.
 - ▶ Descripción de lo percibido.
 - ▶ Posible hora de los hechos.
 - ▶ Cantidad de víctimas.
 - ▶ Demás circunstancias que califican el hecho.
-
- Identificar las primeras acciones emprendidas en el lugar de los hechos por particulares, funcionarios públicos, entidades como bomberos, paramédicos, Policía Nacional, antiexplosivos, guardas de seguridad, funcionarios de la Cruz Roja, Defensa Civil, Aero civil, Fuerzas Militares, INPEC, entidades administrativas locales o nacionales, entre otros, con el fin de identificar las acciones desarrolladas por cada uno de ellos, logrando ampliar la información inicialmente obtenida por el primer responsable; así mismo se exigirán los informes respectivos.
 - En caso que sea necesaria la evacuación inmediata de víctimas (ocisos o lesionados) del lugar de los hechos, registrar el sitio donde fueron halladas, posiciones y lesiones.
 - Valorar factores externos que puedan incidir en el adecuado análisis del lugar de los hechos, esto es, condiciones climáticas, incidentes que generen afectaciones fortuitas o de fuerza mayor, como lo pueden ser asonadas, derrumbes, obstáculos naturales, factores de inseguridad, tránsito de vehículos, peatones, entre otros.
 - En lugar de los hechos donde sea necesario la colaboración de expertos en ciencias o disciplinas ajenas al conocimiento de los funcionarios de la Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces, se deberá coordinar el acompañamiento del experto que aplique al caso, ejemplo de esto, son los eventos con presencia de marcas de fuego, en donde un analista de incendios de organismos como los Bomberos, generan mayor grado de conocimiento técnico-científico.

En lo posible la Unidad Móvil de Criminalística o quien haga sus veces, establecerá una zona operativa fuera del lugar de los hechos o del primer anillo de acordonamiento, en la que los equipos, herramientas, materiales y los EMP, puedan ser colocados mientras que se observa, gestiona, valora y planifica el abordaje de este.

La unidad móvil de criminalística o quien haga sus veces, observará ubicando el punto de referencia, desde donde se puede efectuar una correcta y minuciosa visualización del lugar de los

hechos (punto focal).

Basados en la información preliminar obtenida y la observación, el personal de la unidad móvil de criminalística o quien haga sus veces, deberá valorar el lugar de los hechos en su conjunto, así:

- La protección y acordonamiento ejecutado por el primer responsable.
- Si se trata de un lugar de los hechos primario y la existencia de otros lugares.
- Identificar pasillos o áreas limpias de trabajo.
- Vías de entrada y salida.
- La posibilidad de hallar elementos materiales probatorios y evidencia física, aplicándoles el procedimiento establecido de acuerdo a su vocación probatoria.
- Las áreas que puedan contener evidencia.
- La seguridad del sitio donde se ubica el lugar de los hechos.

Esta valoración, se realizará por el menor número de personas posibles, preferiblemente por el jefe o responsable del equipo técnico científico o quien éste delegue sin que se altere o contamine el lugar de los hechos, en todo momento se deberá utilizar los Equipos de Protección Personal (EPP); se deberá utilizar el traje de bioseguridad durante la inspección al lugar de los hechos.

Realizar una planificación para el abordaje del lugar de los hechos, así:

- Determinar la necesidad de recursos materiales y humanos, como mínimo tres funcionarios que cuenten con la capacidad técnica requerida, los cuales estarán bajo la coordinación del investigador líder asignado al caso.
- Establecer prioridades para el manejo y recolección de los EMP y EF.
- Estimar el tiempo necesario para desarrollar las actividades técnicas, sin afanes o presiones, el cual varía de acuerdo a:
 - ▶ La ubicación geográfica.
 - ▶ La complejidad del lugar de los hechos. (Extensión, número y clase de EMP y EF, actividades técnicas o científicas a realizar, condiciones de seguridad
 - ▶ La cantidad de horas laboradas con antelación al caso.
 - ▶ Las condiciones de iluminación para la observación del lugar de los hechos (día o noche).
- Elaborar por lo menos dos hipótesis del caso o más, para influenciar en la toma de decisiones.
- Coordinar la asistencia de otras unidades especializadas.
- Registrar la planificación de las actividades a realizar en el formato Lista de Chequeo

para la Inspección y Procesamiento del Lugar de los Hechos.

- Aplicar las actividades de bioseguridad
- Conducir a los conductores implicados al Instituto de Medicina Legal, solicitando el examen de embriaguez y su valoración.
- Solicitar los inventarios de los vehículos comprometidos.
- Verificar la autenticidad de los documentos tanto de los vehículos como de los conductores o identificación del participante y en calidad de que intervino.
- Realizar el Informe Ejecutivo dirigido a la autoridad competente para su instrucción.

CONSIDERACIONES PENALES:

Los accidentes de tráfico según el artículo 109 de la Ley 5599/00 en Colombia están tipificados como delitos culposos con prisión de 32 a 108 meses y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, igual que accesoriamente si es utilizado un medio motorizado y armas de fuego se impondrá la suspensión de licencia de conducir y permiso de porte y tenencia de armas. De 48 a 90 meses.

La Ley 1326 de 2009 modifica el artículo 110 de esta misma norma y agrega tres agravantes punitivos a tener en cuenta para este injusto penal quedando en la actualidad cinco agravantes entre los más constantes esta la embriaguez y el conducir sin licencia o con ella suspendida.

Este procedimiento se venía adelantando igual que para los demás tipos penales, pero a partir del 2017 con la Ley 1826, se incorpora un procedimiento penal abreviado para varios tipos en donde se encuentran los delitos culposos con ello se pasa a dos audiencias, se solicita la conversión y se regla el acusador privado.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En palabras de Roxin, el Derecho penal no puede retroceder por principio frente a la tarea de luchar contra los riesgos que son más peligrosos para la sociedad y para el individuo que la criminalidad clásica¹. Frente a la modernización de la sociedad –destaca Corcoy Bidasolo- el Derecho penal debe realizar esfuerzos para asumir los nuevos problemas sociales y no inhibirse frente a ellos. La sociedad moderna y, en concreto, los avances científicos generan ventajas reales, pero también riesgos que requieren una intervención del Derecho penal con la creación de nuevos delitos, por lo que entiende, entre otras cosas, que la utilización de los delitos de peligro abstracto es algo perfectamente asumible por un Derecho penal garantista².

1 Conf. Roxin Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal (Traducción de Carmen Gómez Rivero y María del Carmen García Cantizano), pag. 90, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

2 Conf. Corcoy Bidasolo Mirentxu, Delitos de peligro y protección de bienes jurídicos penales supraindividuales, pags. 188, 194, 369 y sig., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

El derecho penal, con sus herramientas disponibles, no sólo debe prestar atención a los nuevos tiempos, sino que debe adecuarse a la realidad social imperante y en la que debe ser aplicado, para poder enfrentar con éxito los nuevos riesgos, los que ya existen y los que vayan apareciendo en el futuro. Este moderno derecho penal –adecuado a los tiempos actuales y recurriendo a distintos modelos de intervención (adelantamiento de la intervención punitiva a momentos previos a la lesión, delitos de peligro abstracto, bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, etc.)-, no debe abandonar, eso sí, los criterios tradicionales de imputación y las garantías básicas del Estado constitucional de Derecho.

Es deber del Estado actualizar y vigilar el cumplimiento de las normas Procesales, teniendo en cuenta las garantías del debido proceso, para demostrar de acuerdo con las nuevas tecnologías la incorporación de EMP/EF, para luego ser controvertidos en juicio, siendo consecuentes con las características en derecho probatorio de conducencia, pertinencia y utilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÁCER GUIRAO RAFAEL, ¿Lesión del bien jurídico o lesión del deber?. Apuntes sobre el concepto material del delito, Serie Mayor, Atelier, Barcelona, 2003.

ARTEAGA SANCHEZ JOSÉ, La culpabilidad en la teoría del hecho punible, Universidad

BAJO FERNÁNDEZ MIGUEL, Nuevas tendencias en la concepción sustancial del injusto penal, InDret 3/2008, Revista para el Análisis del Derecho, disponible en www.indret.com

BETTIOL GIUSEPPE, Derecho penal, “Parte general”, Temis, Bogotá, 1965, Bibliografica Omeba, Buenos Aires, 1967.

CARMONA SALGADO CONCEPCIÓN, Delitos contra la seguridad del tráfico, en Derecho penal español, parte especial, (Dir. Manuel Cobo del Rosal), Madrid, 1997.

Central de Venezuela, Caracas, 1975.

Constitución Política de Colombia

Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, Ley 1326 de 2009, Ley 1826 de 2017.

Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004

Código Nacional de Tránsito y Transporte. Ley 769 de 2002 Mdf. Ley 1383 de 2010

DE VICENTE MARTÍNEZ ROSARIO, Seguridad vial y Derecho penal. En especial el homicidio imprudente cometido con vehículo a motor”, disponible en www.unifr.ch.

FERNÁNDEZ BERMEJO DANIEL, El delito de conducción de vehículos de motor bajo la influencia de los efectos del alcohol, La Ley penal, No. 119-2016, Madrid, disponible en www.UDIMA.es.

FIGARI RUBÉN E., Mas consideraciones sobre los denominados delitos de tránsito, disponible en <http://www.rubenfigari.com.ar>

Policía Nacional, Dirección Nacional de Escuelas, Escuela de seguridad Vial, Investigación de Accidentes de Tránsito en Colombia.

Manual para diligenciar Informes Policiales de Accidentes de Tránsito, Resolución 0011268 de 2012.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA AL DERECHO PENAL Y LAS CIENCIAS FORENSES



Leidy Esmeralda Herrera Jara

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología,
UMECIT, Panamá
leherrera27@gmail.com

Fecha de recepción: 25/08/2019

Fecha de revisión: 12/08/2019

Fecha de aceptación: 13/09/2019

RESUMEN

Es imperativo que tanto estudiantes como investigadores profundicen en el tema de la investigación: cómo investigar, qué investigar y de qué manera hacerlo, inculcar el espíritu científico que debe ser la esencia de la formación superior. La importancia del conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas de investigación en el campo del derecho y las ciencias forenses radican en la adquisición de las herramientas necesarias para el desempeño eficiente del ejercicio profesional. Esto quiere decir que no sólo van a ser útiles estas herramientas para acreditar una materia u obtener un grado académico, sino que al aprenderlas durante la formación académica se van a poner en práctica también como postulante o litigante, como operador judicial, como asesor jurídico en los Congresos legislativos o en la administración pública o privada y, sin duda, como docente e investigador. La investigación es un procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio, sean humanísticos o científicos. Puede ser efectuada durante el período de clases o en periodos aparte según las circunstancias y posibilidades del ámbito académico. El Investigar conlleva al desarrollo de una actividad especial, sistemática, controlada, empírica y crítica, orientada por conceptos y categorías, ordenada por una estrategia de procedimientos y destinada a producir conocimiento científico sobre un aspecto o área de la realidad o a resolver problemas prácticos de ella.

Palabras clave: Metodología, Investigación, Jurídica, Forense

METHODOLOGY OF THE RESEARCH APPLIED TO CRIMINAL LAW AND FORENSIC SCIENCES

ABSTRACT

It is imperative that both students and researchers delve into the topic of research: how to investigate, what to investigate and what to do, instill the scientific spirit that must be the essence of higher education. The importance of knowledge and the application of research methods and techniques in the field of law and forensic sciences lie in the acquisition of the necessary tools for the efficient performance of professional practice. This means that not only will these tools be useful for accrediting a subject or obtaining an academic degree, but when they are learned during academic training they will also be put into practice as an applicant or litigator, as a judicial operator, as a legal advisor in Legislative congresses or in public or private administration and, no doubt, as a teacher and researcher. Research is a valid and recommended procedure for all fields of study, whether humanistic or scientific. It can be done during the class period or in separate periods depending on the circumstances and possibilities of the academic field. Research involves the development of a special, systematic, controlled, empirical and critical activity, guided by concepts and categories, ordered by a procedural strategy and aimed at producing scientific knowledge about an aspect or area of reality or solving practical problems of it.

Keywords: Methodology, Investigation, Legal, Forensic

INTRODUCCIÓN

La investigación en la ciencia jurídica y forense, expone algunas de las particularidades de la investigación como parte de las ciencias sociales y establece valoraciones sobre sus nudos cognitivos. Partiendo de consideraciones generales sobre aspectos del diseño enfocado en la generación de conocimiento tales como la fundamentación, el problema, la hipótesis y los métodos, realiza consideraciones sobre los matices de estos eslabones en la epistemología del derecho.

La tipología de la investigación guarda relación con variables como las siguientes: el formato de datos con el que se trabaje y los métodos que se requieren para interactuar con el objeto de las investigaciones (documental o de campo), el análisis de la información que realiza y el fin que se propone (cuantitativa y cualitativa), el nivel de profundidad a la que llega (exploratoria, descriptiva y explicativa), la dimensión de tiempo en la que se ubican (históricas, descriptivas-actuales, experimentales), el lapso de tiempo que abarcan (transversales u horizontales), el escenario en donde se desarrollen (de laboratorio, de campo o bibliográficas), la metodología que emplean

(experimental, no experimental o cuasi-experimental), el propósito que tengan (pura y aplicada), etc. (AnderEgg, 1990: 99; AchiG, 1986: 56).

Esta multilateralidad epistemológica de los objetos de la ciencia jurídica y forense puede ilustrarse en el siguiente ejemplo: la violencia intrafamiliar, además de ser de interés para varias áreas de las ciencias sociales, puede ser abordada por el Derecho desde una dimensión teórica (la respuesta penológica a este actuar, la garantía procesal a las víctimas, la regulación de mecanismos sociales e institucionales que pueden incidir en la disminución del fenómeno, etc.), desde un enfoque empírico cuantitativo (la medición de esta problemática en un ámbito geográfico específico y la detección de las determinantes criminógenas que la provocan) y desde una metodología empírica cualitativa (la comprensión de los efectos psíquicos que tiene el fenómeno en las víctimas o los trastornos de personalidad conducentes con posterioridad a conductas delictivas). De igual forma, el mismo tópico puede conformar una investigación exploratoria (en una región en que de manera atípica se presenta un incremento de este actuar) o una explicativa (en otra en donde se desea llegar hasta ese nivel).

LA INVESTIGACIÓN

La investigación puede realizarse individualmente, de acuerdo con las preferencias y aptitudes particulares, o en grupo, alrededor de un mismo asunto considerado fundamental para todos los estudiantes.

La investigación puede acudir a experiencias, encuestas, visitas, excursiones, consultas a autoridades en determinados asuntos búsquedas en archivos y bibliotecas, consultas a entidades científicas, culturales y administrativas, nacionales y extranjeras. De ahí la necesidad de la academia, en todos los niveles, de enaltecer su coordinación, con la comunidad, poseer laboratorios y fortalecer la biblioteca.

La investigación no debería ser solamente una técnica de enseñanza, sino una actitud docente en la cual el profesor debe orientar la enseñanza en ese sentido, esto es, con criterio de investigación.

Francisco Larroyo (1959) manifiesta que el hecho de enseñar investigando implica fortalecer la inteligencia, desarrollar el espíritu de orden, desenvolver la conciencia de la limitación, la sinceridad y la autenticidad académica, desarrollando la capacidad de análisis, complementando con el fortalecimiento del espíritu científico.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS FORENSES

Para la aplicación de métodos y técnicas en el campo de la investigación científica del derecho y las ciencias forenses, se requiere de un conducto general, integrado por objetivos generales y

específicos para no perderse en la tarea indagatoria. Este conducto lo constituye el proceso de la investigación que se circunscribe a fines generales que en materia jurídica son la realización de la justicia y la seguridad jurídica, el bien del hombre, el desarrollo del derecho como ciencia, la búsqueda de la verdad y la paz en la armonía social. La consideración de estos fines, permite al investigador imprimir sentido trascendente a la acción de investigar, lográndose además evitar desviaciones en la instrumentación y valoración crítica de la diversidad de métodos y técnicas existentes.

El investigador científico, en su labor no solo requiere de los conocimientos expuestos sobre valores, fines, proceso indagatorio, métodos y técnicas, necesita además una actitud científica en la búsqueda de la verdad.

Debe el investigador despojarse de subjetivismo y posiciones ideológicas extremas, buscando la verdad por encima de toda visión parcial de la realidad mediante el análisis, confrontación y evaluación de las diversas manifestaciones ideológicas.

“El científico debe procurar conservar durante todo el trabajo la actitud psicológica de amor y búsqueda de la verdad por encima de todo interés y preocupación personal. Pero no basta el amor a la verdad sino hay que buscarla con serenidad y objetividad”. (Villoro, 1973)

El fortalecimiento de las competencias investigativas, interpretativas, argumentativas y propositivas en el investigador conllevan a la contribución, hallazgos y apropiación de nuevos aspectos metodológicos, conceptuales y procedimentales relacionados y orientados sobre hechos propios de la investigación, que contribuyan al saber – hacer en el marco de las investigaciones y la responsabilidad, mediante criterios científicos y técnicos en las pesquisas, que como tales deben cumplir con los requerimientos, condiciones procesales, conceptuales y metodológicas que permitan la validez científica y jurídica de los resultados.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

La investigación necesita de la sensibilidad de quien la desarrolla en tres aspectos fundamentales, de modo que tenga conciencia del trabajo que está realizando para que éste no sea un esfuerzo de “simple ejecución material”:

- Lo que se investiga: Tiene por finalidad llevar al educando a conceptualizar adecuadamente el objeto de la investigación, a delimitar el campo de trabajo, para tener conciencia del objetivo propuesto.
- Por qué o para qué: Implica un acto de reflexión, de valorización teórico práctica, donde

se aspira a dar sentido a la investigación, momento filosófico de la investigación.

- **Cómo investigar:** Aspecto metodológico de la investigación, procura encaminar hacia la consecución de los objetivos previstos considerándose como el momento de la acción de la investigación.

La investigación, para ser auténtica, debe partir de una dificultad o problema sentido y comprendido por el estudiante.

Puede tener origen en:

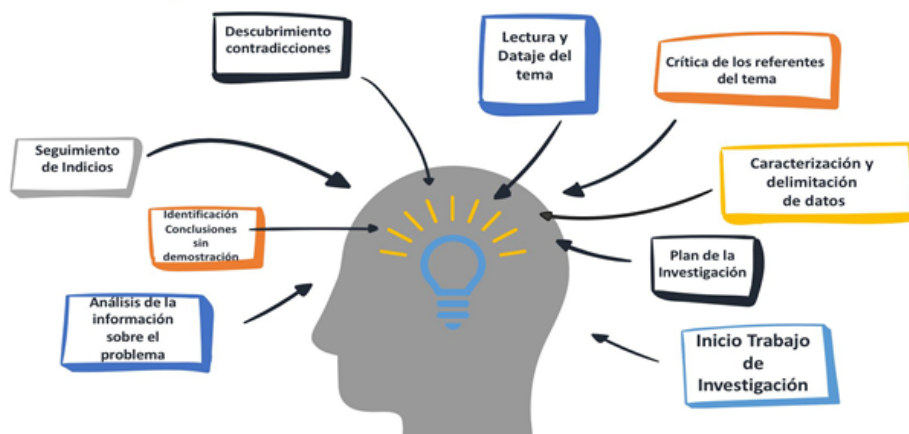
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA IDEA DE INVESTIGACIÓN



Fuente: Elaborada por la autora (2019)

Toda investigación descubriendo el origen y sentida la necesidad reflexiona la caracterización de la siguiente forma:

Caracterización del problema



Fuente: Elaborado por la autora (2019)

Fases del Proceso de Investigación:

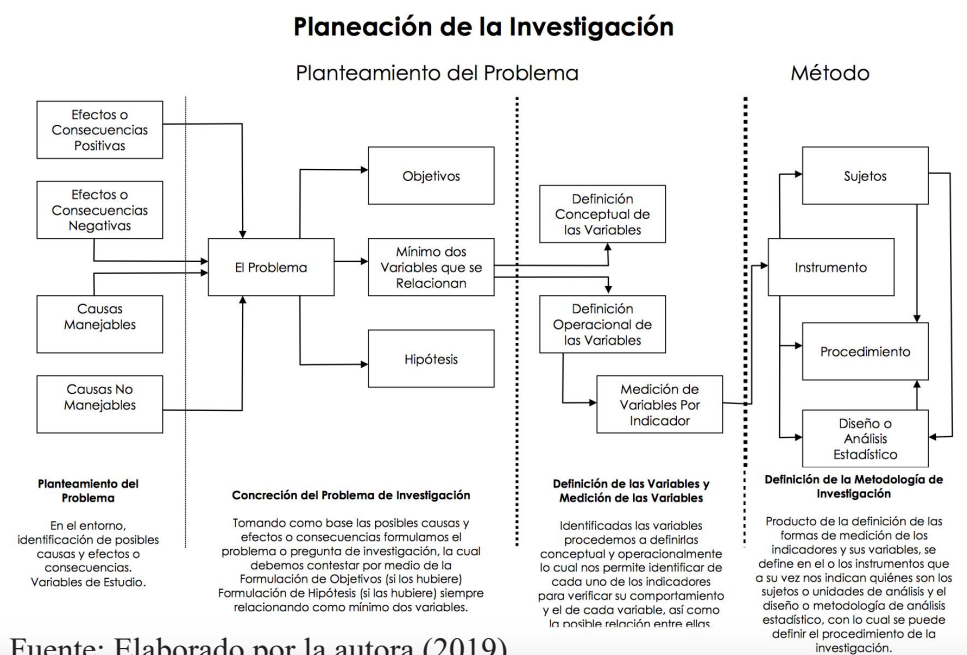
El proceso de investigación presenta fases como:



Fuente: Elaborado por la autora (2019)

Es importante anotar que la estructura del proyecto como punto de partida es la carta de navegación del investigador, donde considera el recorrido, punto de inicio y llegada deseable, permite correcciones anticipadas del desarrollo de la investigación y es el referente permanente durante la misma. La información que contiene debe ser la necesaria y suficiente. Se debe redactar en tiempo futuro e impersonal.

Estructura del Proyecto:



Fuente: Elaborado por la autora (2019)

Planteamiento del problema: El problema surge cuando existe un deseo de comprender y transformar una realidad, producir conocimiento sobre ella, para posteriormente, si es el interés del investigador generar una intervención. Para el caso de los problemas planteados deben estar articulados a las líneas de investigación que plantee la Facultad y la Universidad.

De ahí, que el planteamiento del problema apunte a determinar con claridad, qué aspectos son los que se pretenden mejorar y hasta dónde se quiere llegar en términos de producir un conocimiento.

Los objetivos de estudio: Son los propósitos de la investigación, los cuales deben ser realizables, demostrables y verificables.

El objetivo General es el compromiso último del investigador. Es el resultado que se compromete a presentar al culminar la investigación.

Los objetivos específicos son aquellos propósitos intermedios que permiten ir construyendo el cumplimiento del objetivo general durante el desarrollo de la investigación.

Justificación: Es la argumentación de por qué es importante invertir tiempo, trabajo, recursos y esfuerzos en la investigación propuesta y las desventajas de no llevarla a cabo. Aquí se señalan la importancia, utilidad y beneficios de los resultados esperados.

Los Marcos de Referencia: Son aquellos conjuntos ordenados y articulados de conceptos que posibilitan la comprensión y desarrollo de la investigación. Son los enfoques, los puntos de vista, desde los cuales se elaboran el problema y los objetivos, adquiriendo estatus científico. Los marcos de referencia pueden ser teóricos, conceptuales, legales, geos referenciales, estrictamente pertinentes a la manera como se planteo el problema y los objetivos. Los antecedentes son un marco de referencia que informa sobre el estado del conocimiento del tema a tratar o de investigaciones similares ya realizadas.

El Diseño Metodológico: Es el conjunto de información sobre las características de la investigación y sus procedimientos. Contiene:

PARTES DISEÑO METODOLÓGICO



Fuente: Elaborado por la autora (2019)

CONCLUSIONES

¿Quieres ser un buen litigante? ¿Quieres ser un buen operador judicial? ¿Quieres ser un buen asesor jurídico en los Congresos legislativos y en la administración pública y privada? ¿Quieres ser un buen profesor e investigador? No olvides emplear en tus tareas no sólo las herramientas de investigación documental de las fuentes formales del derecho y de las ciencias forenses, sino también las de investigación empírica de sus fuentes reales.

No solamente la investigación científica ayuda al abogado, también ayuda en gran parte a los demás profesionales como el de las ciencias forenses, pero en materia de derecho esta investiga los hechos de la realidad y los elementos aportados al caso por el sistema jurídico, aparecen los problemas que deben ser solucionados desde el derecho como son la Realidad normativa, Ordenamientos Jurídicos, Práctica judicial, la política jurisdiccional de Estado, Realidad Jurídico social, Las leyes de desarrollo social.

Es competencia del Investigador determinar el valor agregado de los conocimientos adquiridos por medio de la investigación científica al campo disciplinar del derecho, de acuerdo con estos desempeños el estudiante requiere no solo los conocimientos sobre el área del derecho, sino también la forma de discutirlos y proponer soluciones creativas a los problemas que se le plantean, no se trata solamente de una aplicación técnica de normas, sino de una propuesta innovativa en aras de dar soluciones jurídicas.

Así mismo se plantean algunas temáticas de interés para investigar como son a. Tendencias del derecho alternativo, pluralismo y multiculturalismo. b. Violación y protección de derechos humanos, derecho internacional público y derecho internacional humanitario. c. Derecho constitucional, derecho administrativo y políticas públicas. d. Derecho y escuela. e. Derecho, conflicto armado y desplazamiento forzado. f. Derecho y economía. g. Derecho procesal. h. Jurisdicciones especiales. i. Administración de justicia. j. Teoría general del derecho e historia política. k. Bioderecho. l. Derecho ambiental. m. Derecho y tecnología. n. Derecho y globalización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AchiG S., Lucas, (1986). Metodología de la investigación social, Cuenca, Ecuador, Universidad de Cuenca.

Ander-egg, Ezequiel, (1990). Técnicas de investigación social, Alicante, Gráficas Díaz.

Aparisi, Ángela et al., (1992). Introducción a la teoría del derecho, Valencia, Tirant lo Blanch.

ATienza, Manuel, (2001). El sentido del derecho, Barcelona, Ariel.

ATienza, Manuel. (1989). Introducción al derecho, Barcelona, Ariel.

Bascuñán Valdés, Aníbal, (1961). Manual de técnicas de investigación jurídica, Santiago de Chile, Ediciones Jurídicas.

BoBBio, N., (1980). Contribución a la teoría del derecho, trad. A. Ruiz Miguel, Valencia, Fernando Torres Editor.

Bueno, G., (1995). ¿Qué es la ciencia?, Oviedo, Pentalfa.

BunGe, Mario, (1975). La ciencia, su método y su filosofía, Buenos Aires, Siglo XX.
DanhKe, L. B., "Investigación y comunicación", en Fernández-Collado, C. y DanhKe, G. Fix-zamudio, Héctor, (1971). "Reflexiones sobre la investigación jurídica", Revista Jurídica Mesis, No. 2, pp. 34-78.

Erlandson, D. A. et al., (1993). Doing naralistic inquiri, London, Sage, 1993.

GIRALDO ÁNGEL, J. (1999). Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería el Profesional.

Hernández Sampieri, R., Fernández-collado, C., Baptista Lucio, Pilar, (2003). Metodología de la investigación, 3ra ed., México, McGraw-Hill.

La investigación científica, (1972). La Habana, Ciencias Sociales.

L., La comunicación humana: ciencia social, (1989). México, McGraw-Hill.

Larroyo, Francisco. (1959). Pedagogía de la enseñanza superior. México D. F. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 366 págs. Primera edición.

PÉREZ SERRANO, G. (1990). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. Madrid: Editorial La Muralla.

Villoro, Juan. (2017). La vida que se escribe. Edit El Colegio Nacional. 2da edición. México

NORMAS PARA AUTORES

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citados son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA

1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

3. Artículos teóricos: son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

Other cited rules are the following:

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B, and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

1. Articles: they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

2. Essays: It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

3. Theoretical articles: they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

WORK DELIVERY GUIDELINES

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

PRIVACY STATEMENT

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

OPEN ACCESS POLICY

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

IMPORTANT: In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

COPYRIGHT: Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA
254-1141**

**SEDE CHITRÉ
996-4260**

**SEDE SANTIAGO
998-0363**



www.umecit.edu.pa

revistas.umecit.edu.pa

[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)